

Expediente: 620/12

Carátula: **TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/**

Descripción: **SENTENCIA FONDO**

Unidad Judicial: **EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3**

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232187446

**JUICIO: “TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA - EXP. 620/12”.**

Sentencia N°: 11.-

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020.**

**AUTOS Y VISTOS:** Para dictar sentencia definitiva en esta causa caratulada: “TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA - EXP. 620/12”, los que tramitaron por ante el Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo (hoy Juzgado del Trabajo de Primera Instancia) de la VIa. Nominación); y,

### RESULTA:

A fs. 21, se apersonaron los letrados Walter Guido Ibáñez y Carla María Fernández en representación del actor ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Cárcel-Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, e interpusieron demanda en contra de MAPFRE ARGENTINA ART S.A., con domicilio en calle 25 de Mayo N° 628 de esta ciudad, y en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.

Afirmó el actor en su demanda que se desempeñó como empleado temporario de SOMIALCA SERVICIOS SRL desde el 01/07/08, revistiendo la categoría de Estibador, que cumplía su jornada en turnos rotativos de 08 a 14 hs. y luego afirmó: “Las tarea descriptas, fueron desarrolladas por nuestro instituyente sin ningún tipo de protección, ni elementos de seguridad para proteger sus manos y cuerpo. El 19 de Septiembre de 2009, el Sr. Tapia sufre un grave accidente mientras se encontraba estibando bolsas de azúcar a una altura aproximada de 16 mts. en el galpón de su empleador, perdió el equilibrio y cayó al piso, intentando amortiguar su caída poniendo sus brazos hacia delante, lo que no impidió que su cabeza impactara contra el suelo, lo que le produjo pérdida de conocimiento, fractura de muñeca derecha, fractura de piso orbitario, pérdida de visión en su ojo izquierdo, problemas neurológicos y traumatismos varios. En el momento del accidente el Sr. Tapia no contaba con elemento de seguridad alguno, a pesar de encontrarse trabajando a 16 mts. de altura. Luego del accidente el Sr. Tapia fue intervenido quirúrgicamente de su muñeca derecha, y se le realizó reconstrucción del piso orbitario izquierdo produciéndose el cese de la Incapacidad Laboral Temporaria el día 19/09/10, otorgándosele un 49,9% de Incapacidad Parcial, Permanente y Definitiva, la que fue homologada en fecha 18/11/10A todas luces dicho porcentaje resulta cuestionable, ya que resulta inconcebible que no amerite recalificación laboral, un estibador que tiene limitación funcional en su muñeca derecha y que perdiera la totalidad de la visión de su ojo izquierdo, sin contar que no evaluó en forma alguna el TEC con pérdida de conocimiento del actor, sumado a los problemas neurológicos y psicológicos que presenta el mismo como consecuencia directa del accidente. Por otro lado dicho informe resulta contradictorio con el informe realizado por el Dr. Alfredo Zottola que expresa: “Paciente de 31 años de edad, que consulta, por pérdida de visión en ojo izquierdo cefalea, limitación funcional de muñeca derecha y trastorno cognoscitivosDe lo expuesto se infiere, que hay un nexo causal indiscutible entre la afección que presenta el actor, el accidente producido, y la labor realizada al servicio de la demandada, esto sin contar con el

reconocimiento expreso del accidente de trabajo por denuncia formulada por parte del empleador a la ART. En consecuencia, para la reparación de los daños causados por el accidente denunciado en su capacidad laborativa y de vida, se promueve la presente demanda, a los efectos de lograr la reparación integral del daño sufrido, ya que la ART solo abonó parte del lucro cesante en base a los parámetros de la Ley de Riesgo de Trabajo. Conforme lo manifestado ut supra venimos por la presente a reclamar la reparación integral del daño sufrido como consecuencia del siniestro producido, lo que debe comprender todos los aspectos de la vida del individuo o dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que sufran y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que realizaba como así también compensar de algún modo las expectativas frustradas. La reparación integral de los daños tiene raigambre constitucional establecida en el art. 19 de nuestra Carta Magna. La corte Suprema se ha pronunciado al respecto indicando que: “la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del C.C. consagra el principio general establecido en el art. 19 de la C.N. que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de terceros”.

Luego el actor en su demanda detalló el concepto de responsabilidad objetiva y se refirió a la aplicación del art. 1113 del Código Civil, a continuación expuso la responsabilidad emergente por violación a las normas de Seguridad e Higiene del Trabajo para luego adentrarse en la responsabilidad concurrente de la ART por la responsabilidad civil invocando como fundamento de ello el art. 4 de la ley 24.557, y el Dto. 170/96 con fundamento en lo dispuesto por los arts. 1074, 1068 y 1078 del C.Civil y expuso: “No cabe duda sobre la responsabilidad omisiva de la aseguradora demandada en los términos del art. 1074 del Código Civil y con idéntica extensión y montos que el restante codemandado en cuanto debió controlar en el caso concreto de autos, el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad por la empleadora del actor (art. 4º, inc. 1º y 4º de la ley 24.557) a los fines de evitar la producción del evento dañoso. Asimismo, en el caso que no condene a la aseguradora de riesgos de trabajo en forma solidaria con la demanda; solicito a V.S. que se condene a PROVINCIA ART S.A. a abonar la indemnización de acuerdo a los Topes de la ley de Riesgos del Trabajo, por estar obligada a dicho pago, sin perjuicio de la declaración de inconstitucionalidad de la norma”.

Finalmente en su demanda el actor planteó la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 4, 6, 8, 14, 15, 39, 40, 46, 49 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557.

A fs. 66, se apersonó el letrado Rafael Rillo Cabanne en representación de MAPFRE ARGENTINA ART S.A., y quien al contestar demanda manifestó: “Acciona el Sr. Tapia contra mi mandante, reclamando el pago de la suma de **\$379.900** -con fundamento en la ley 24.557, por las sumas que entiende le corresponden por incapacidad laboral definitiva, como consecuencia de unas supuestas enfermedades laborales. Al respecto debemos destacar que en el sistema de la ley 24.557, no hace falta que el trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, demuestre la responsabilidad del empleador o de la ART para percibir las prestaciones. Basta con hacer la denuncia por ante la ART y demostrar que el hecho se encuadra dentro de lo establecido por el art. 6 de la L.R.T., para percibir las prestaciones en especie o dinerarias previstas en dicha normativa. Cabe destacar, que en el caso de autos el actor, como así tampoco el empleador, jamás realizaron denuncia alguna ante mi mandante. Habiendo quedado claramente delimitado el reclamo que se formula, debe encuadrarse el presente responde teniendo en cuenta la propia normativa legal en que se funda la acción incoada (Ley 24.557) cuanto el objeto y límites de la cobertura que se otorga mediante el Contrato de Afiliación n° **116041** celebrado entre mi mandante y SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. (delimitados por la Ley 24.557, Decretos Reglamentarios dictados en su consecuencia y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, autoridad de aplicación de la normativa y contralor de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo).- Siguiendo esta metodología, cabe referirse en primer término a la ley que mi mandante considera aplicable al sub lite y, posteriormente, a las defensas de fondo que habrán de oponerse a la acción que ahora deduce la parte actora -como seguidamente se expresará-, para finalmente y en subsidio, pasar a la contestación de la demanda propiamente dicha, por aquello de que el demandado debe oponer todas las excepciones o defensas que no tuvieren carácter previo; reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, al igual que la autenticidad de la documental que se le atribuya y especificar los hechos que alegare como fundamento de su defensa” (el resaltado del texto con negrita pertenece a origen).

Luego esta accionada reconoció la existencia del contrato de afiliación celebrado con SOMIALCA SERVICIOS SRL y manifestó la inexistencia de relación de causalidad entre el accidente relatado y las supuestas secuelas: “Mas allá de negar su existencia, en relación a las supuestas secuelas mencionadas por el actor, mi mandante no puede dejar de advertir que, en ningún momento, el accionante explicita sus argumentos por los que habría de reputar las actuales supuestas dolencias, en el caso en que se comprobara su veracidad, como consecuencias de las supuestas enfermedades que alega haber sufrido. En cuanto a la aludida relación de causalidad, la misma implica que deben existir pruebas de orden clínico, patológico, epidemiológico, consideradas aisladas

o concurrentemente, que permitan establecer una asociación CAUSA-EFECTO, entre la supuesta secuela y el desenvolvimiento de los hechos en torno a las enfermedades aludidas. Es necesario precisar una vez más, que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, incluida en el esquema de la LRT y, por consiguiente, como parte integrante de un subsistema de la Seguridad Social, tiene funciones específicas asignadas por la ley 24.557 (Art. 26, inc. 3) que la limitan estrictamente en su objeto y, en consecuencia, sólo puede ser responsable por las prestaciones en especie y dinerarias que otorga esta normativa (Capítulo IV y V, Arts. 11, 20 y cc.), pero de ningún modo puede ser citada o emplazada en juicio por pretensiones que excedan dicho marco, es decir, para responder por una indemnización dentro del ámbito de la ley civil, marco legal invocado por la contraria”.

Luego la accionada dedujo excepción de falta de legitimación pasiva argumentando para ello la inexistencia de seguro por responsabilidad civil del empleador y se opuso a una eventual extensión de la condena en los términos de los arts. 1109 y 1113 del C.C.

Afirmó la accionada que: “Reconozco que el 18/11/10 se realizó la audiencia de Homologación en la OFICINA DE HOMOLOGACIÓN Y VISADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO donde se otorga al actor una incapacidad parcial y permanente del 49.9 % **Reconozco que el actor percibió por dicha incapacidad la suma de \$52.100**” (el resaltado del texto con negrita pertenece a origen).

Finalmente se opuso la accionada a los planteos de inconstitucionalidad que dedujo el actor en su demanda.

A fs. 166, consta providencia en la cual se tiene por incontestada la demanda por la codemandada SOMIALCA SERVICIOS SRL.

A fs. 175, se apersona el letrado Copa Rubén Pablo en carácter de apoderado del actor.

A fs. 211 a 212, se agregó el dictamen pericial médico realizado por el perito oficial en el marco de lo normado por el art. 70 del CPL.

A fs. 226, se apersonó el letrado Héctor José Graneros en representación de SOMIALCA SERVICIOS SRL.

A fs. 227, consta agregada acta de audiencia conforme lo prescripto en el art. 69 del CPL en la que se apersonó por la codemandada SOMIALCA SRL el letrado Héctor José Graneros y se hizo constar que no se arribó a conciliación alguna.

A fs. 234, mediante providencia de fecha 12/08/15 se tiene presente la renuncia del letrado Graneros al poder conferido por la codemandada SOMIALCA SRL.

A fs. 251, el letrado Rillo Cabanne informa fusión por absorción y disolución de la ART MAPFRE ARGENTINA ART SA quien fue absorbida por GALENO ART SA.

A fs. 417, consta el informe realizado por secretaría Actuarial del que surge respecto de la actividad probatoria de las partes que la parte actora ofreció los siguientes cuadernos de pruebas: 1) instrumental: producida; 2) informativa: parcialmente producida; 3) testimonial: producida; 4) pericial psicológica: sin producida; 5) pericial médica: producida; 6) exhibición: sin producir; 7) confesional: producida. La parte codemandada ART ofreció los siguientes cuadernos de pruebas: 1) documental: producida; 2) informativa: sin producir; 3) informativa: sin producir; 4) pericial medica: producida; 5) pericial contable: sin producir.

A fs. 422, se agregaron los alegatos de la parte actora, a fs. 425 a 429 se agregaron los alegatos de la ART codemandada.

Elevadas las actuaciones a esta Sala III de la Cámara de Apelación del Trabajo, se integró la misma, se remitió a la Sra. Agente Fiscal a fin que se expida sobre los planteos de inconstitucionalidad formulados en la demanda y fueron los autos llamados a conocimiento para resolver y

**CONSIDERANDO:**

**VOTO DEL SR. VOCAL PREOPINANTE ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI:**

Entiende esta Vocalía que corresponde en forma previa excluir aquellos extremos que se encuentran reconocidos expresa o tácitamente por las partes, como ser la existencia de la relación laboral entre la actora y la codemandada SOMIALCA SERVICIOS SRL.

Asimismo, no controvirtieron las partes que la ART codemandada -como aseguradora de riesgo contratada por la empleadora- le brindó al actor prestaciones médicas y dinerarias en virtud de la incapacidad que se le determinara por la comisión médica con relación a la dolencia del accionante originada por el accidente sufrido en fecha 19.09.09.

En merito a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde determinar como puntos contradictorios a tratar a aquellos hechos que requieren un previo análisis de la plataforma fáctica de autos y poder así llegarse a dilucidar la verdad objetiva del caso conforme al principio de la sana critica racional. Asimismo, es pertinente encuadrar los supuestos probados, dentro de las normas aplicables al caso concreto.

En tal sentido, las cuestiones controvertidas son: 1.- inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 4, 6, 8, 14, 15, 39, 40, 46, 49 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, 2.- características de la relación laboral 3.- la incapacidad del actor, 4.- responsabilidad civil de SOMIALCA SERVICIOS SRL, 5.- responsabilidad de la ART demandada, y 6.- rubros e importes reclamados.

### **PRIMERA CUESTIÓN:** Inconstitucionalidad de la ley 24.557

Cabe destacarse que el actor cuestionó en su demanda la constitucionalidad de los arts. 1, 2, 4, 6, 8, 14, 15, 39, 40, 46, 49 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557.

A su vez, la ART codemandada en su responde de demanda solicitó el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad y la Sra. Agente Fiscal de Cámara dictaminó recomendando la declaración de inconstitucionalidad de la norma atacada.

Surge del texto de la demanda -antes expuesto- que la solicitud del actor de declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.557 apunta a allanarle el camino para que se torne viable la reparación integral civil por la imputación de responsabilidad a la empleadora por las consecuencias del accidente de trabajo sufrido por la misma en virtud de lo dispuesto en la normativa civil de fondo.

Cabe recordar que el planteo de inconstitucionalidad referido al art. 46 de la ley 24.557 si bien no fue resuelto de modo expreso por el Sr. Juez de Conciliación y Trámite, se procedió a elevar las actuaciones a esta Excma. Cámara y se encuentra firme el pase de los autos para resolver la cuestión de fondo.

Asimismo, los litigantes de autos continuaron con los trámites del proceso prestando con ello tácita conformidad con la competencia asumida por el Juez de Conciliación, por lo que considero resulta abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT. Así lo declaro.

Por otro lado, el actor sostuvo la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 49 de la LRT, sosteniendo que las normas no le permiten a él ni a sus derechohabientes reclamar la reparación integral del daño (con excepción del dolo del empleador), permitiéndole la posibilidad solamente de obtener un resarcimiento tarifado y por ende limitado del daño sufrido. Continúa y agrega que dicho impedimento legal vulnera el principio de igualdad ante la ley prescripto en el art. 16 de la CN porque cercena la posibilidad del trabajador dependiente de accionar por la reparación integral del derecho civil del que si gozan todos los habitantes de la nación. También, que se vulnera el principio de indemnidad consagrado en el art. 19 de la CN.

Luego, indica que en el fallo “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA” se declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT por alterar profundamente los principios constitucionales referidos en el párrafo anterior, además de los arts. 17 (referido al derecho de propiedad) y 18 de la CN (en cuanto el derecho de defensa en juicio).

Analizando el caso de autos, de ambos preceptos legales cuestionados surge que existe efectivamente una privación que sufren las víctimas de infortunios laborales de acceder a la tutela civil para la reparación de los daños sufridos y de la que sí gozan todos los habitantes conforme al derecho común.

Cabe recordar que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación se encuentra constitucionalmente enunciado en el art. 16 CN, y por ello se establece que “todos sus habitantes son iguales ante la ley”, sin hacer distinción entre nacionales y extranjeros (art. 20 CN),

correlacionado con lo dispuesto siempre en nuestra ley fundamental en el art. 75 inc. 19), cumplimentado y ampliado inclusive a través de lo dispuesto en el inc. 22) de ese mismo artículo, en lo relativo a tratados y pactos internacionales jerarquizados constitucionalmente.

Asimismo, la Constitución Nacional prevé el principio del “alterum non laedere” en su artículo 19 (segunda regla de Ulpiano), cuya concreción se encuentra en los ex artículos 1109 y 1113 y cc. del Código Civil (vigente a la época).

Entonces, el art. 39, 1° párrafo, de la Ley de Riesgos del Trabajo analizado crea un territorio de exclusión de los trabajadores por su condición de tales, alzándose contra la igualdad garantizada en la Constitución Nacional. Así, lo prohibido contractualmente a los ciudadanos pretendió ser legal por obra del legislador mediante su dictado. Y lo expuesto no significa en modo alguno negar la legalidad de la tarifa prevista en dicho sistema, sino señalar la irrazonabilidad -y consecuente inconstitucionalidad- de las normativas contenidas en la LRT que impiden al trabajador acceder a una reparación integral.

En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Castillo c/ Cerámica Alberdi”, el Tribunal destacó que ya en 1917 se dijo que la responsabilidad por los accidentes de trabajo es de derecho común, y agregando que la LRT no dispone la federalización del régimen reparatorio en estas relaciones entre particulares, señalando también que la competencia no es una cuestión librada al mero arbitrio del legislador.

A su vez, en el fallo dictado por el Supremo Tribunal Nacional en la causa “Aquino c/ Cargo Servicios Industriales” (A. 2652 XXXVIII), al tratar la cuestión del art. 39 inc. 1° hizo hincapié en el art. 19 de la Constitución Nacional, entrañablemente vinculado a los ex artículos 1109 y 1113 del Código Civil. Aquí el Tribunal reestablece principios que habían sido dejados de lado como consecuencia de la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo y otras normas que consideraron jurídicamente en menos al hombre que trabaja.

Entonces, el trabajador debe tener la posibilidad de obtener no sólo una reparación menguada que contenga una parte de la integridad -tal como le brinda la LRT-, sino una reparación que contemple el daño material, lucro cesante, daño moral y daño al proyecto de vida, aludiendo así el Tribunal a la moderna doctrina del Derecho de Daños que habla del daño biológico y el daño a la salud y al bienestar de la persona.

Es que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos, ya que sostener lo contrario, conlleva afianzar una noción materialista distinta a la idea integral de los bienes materiales y espirituales, que acabarían por estructurar al hombre como esclavo de las cosas, de los sistemas económicos, de la producción y de sus propios productos. Esta y otras citas pueden ser observadas de la lectura del fallo.

La Corte también ha señalado que la justicia de reparar al trabajador accidentado como a cualquier otro en los aspectos referidos a la extensión de la indemnización y a los items que la misma debe comprender, debe integrarse con el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y la pérdida de chance cuando los mismos correspondan.

Ha edificado sus consideraciones sobre la base de tres fundamentos que exceden lo económico y acude así a los principios de cooperación, solidaridad y justicia, así como también, al principio que enseña que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, con una naturaleza inviolable.

Se ha expresado así que el art. 39, 1° párrafo, establece una clara discriminación entre la generalidad de los sujetos a quienes está dirigida la preceptiva del ex art. 1.113 del Código Civil y aquellos que sufren daños personales en circunstancias de desempeñarse en trabajos en relación de dependencia (ámbito de aplicación definido en su art. 1°); ya que los primeros pueden reclamar resarcimiento integral al dueño o guardián de la cosa que les haya causado daño, mientras que los segundos no por la sola circunstancia de ser o haber sido dependiente de aquél.

Asimismo, en el precedente "Falcón, Restituto c/Armada Argentina, Comando de Transportes Navales", sent. 33.734 del 23.6.2000, se ha recordado que desde antigua data la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene sosteniendo que el trato diferenciado debe tener basamento en circunstancias objetivas razonables que justifiquen apartarse de una garantía que es pilar de la forma republicana y que "...no puede alegarse con seriedad...que esta excepción se configure por el mero motivo de ser sociológicamente dependiente y haber celebrado un contrato de trabajo..." (con cita del dictamen N°: 29.666 del señor Fiscal General de esta Cámara emitido con fecha 12.6.2000 en la causa "Pérez, Liliana del Carmen c/ Proinversora S.A. y otros", de la Sala I).

Y discriminación esta que no es coherente con el principio de igualdad ante la ley instituido por la Constitución Nacional en su art. 16, ni tampoco con otros principios adoptados y recogidos por nuestra Constitución Nacional por la vía de la incorporación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Cabe agregar a lo anterior que "el alterum non laedere" establece la obligatoriedad de reparar el perjuicio por cuando el resarcimiento se vincula con la vida y la salud de las personas, vinculado a la idea de reparación tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el ex Código Civil, en cuanto a las personas y responsabilidades consecuentes, no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (cfr. "Luciano, Enrique c/ Noren Plast S.A. s/ Accidente - Acción Civil"; S.D. 36.664 del 05.05.03).

Como consecuencia de lo expuesto, se declaran inconstitucionales los arts. 1 y 39, 1° párrafo y 49, de la ley 24.557 y, consecuentemente, inválido e inaplicable en la presente causa por violentar lo dispuesto por la Constitución Nacional (arts. 16, 17, 28, 31, 75 -incs. 22 y 23- y 14 bis de la CN) y tratados internacionales de derechos humanos. Así lo declaro.

Por otra parte, si bien el actor planteó además la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, pero nada expresó con relación al fundamento de su ataque de inconstitucionalidad de dichas normas, y por lo que los mismos son rechazados. Así lo declaro.

## **SEGUNDA CUESTIÓN:** Características de la relación laboral.

Respecto de esta cuestión, cabe recordar que la codemandada SOMIALCA SERVICIOS SRL no contestó demanda por lo que se le aplicó el apercibimiento previsto en el art. 58 del CPL.

A su vez, que la ART codemandada reconoció la existencia de la relación laboral y negó las características de la misma denunciadas en la demanda, pero sin dar su propia versión respecto de estas últimas y por lo que se le aplica el apercibimiento previsto en el art. 60 del CPL. Así lo declaro.

Plantada así la cuestión, corresponde proceder al análisis del plexo probatorio, recordando que por el principio o juicio de relevancia puede el sentenciante considerar solo aquellas pruebas que entienda tengan relevancia para la solución del litigio.

Respecto de la documentación adjuntada por el actor con su demanda -y de la que da cuenta el cargo de recepción de fs. 48 vta.-, cabe mencionar que respecto de la accionada SOMIALCA SERVICIOS SRL se hizo efectivo el apercibimiento previsto en el art. 58 del CPL y por ello cabe tener por auténticos -salvo prueba en contrario que pudiere obrar en autos- los recibos de haberes acompañados por el actor en su demanda. Así lo declaro.

Surge de los recibos de haberes que el actor fue registrado por la empleadora SOMIALCA SERVICIOS SRL con fecha de ingreso el 01/07/08 y que se consignó que la categoría del actor era de "ESTIBADOR" y en la jornada demandada.

A fs. 264 a 271, se agregó la respuesta al oficio librado al AFIP -la que no fue impugnada por las partes-, y de allí surge que la oficiada remitió historial de aportes donde consta que SOMIALCA SERVICIOS SRL realizó aportes al actor a partir del mes de julio del año 2008.

En virtud de todo lo anterior, considero acreditado que la relación laboral se inició el 01/07/08, que el actor se desempeñó como estibador y que lo hacía en turnos rotativos de 8 a 14 hs. Así lo declaro.

### TERCERA CUESTION: la incapacidad del actor

Afirmó el actor en su demanda que: “El 19 de Septiembre de 2009, el Sr. Tapia sufre un grave accidente mientras se encontraba estibando bolsas de azúcar a una altura aproximada de 16 mts. en el galpón de su empleador, perdió el equilibrio y cayó al piso, intentando amortiguar su caída poniendo sus brazos hacia delante, lo que no impidió que su cabeza impactara contra el suelo, lo que le produjo pérdida de conocimiento, fractura de muñeca derecha, fractura de piso orbitario, pérdida de visión en su ojo izquierdo, problemas neurológicos y traumatismos varios. En el momento del accidente el Sr. Tapia no contaba con elemento de seguridad alguno, a pesar de encontrarse trabajando a 16 mts. de altura. Luego del accidente el sr. Tapia fue intervenido quirúrgicamente de su muñeca derecha, y se le realizó reconstrucción del piso orbitario izquierdo produciéndose el cese de la Incapacidad Laboral Temporaria el día 19/09/10, otorgándosele un 49,9% de Incapacidad Parcial, Permanente y Definitiva, la que fue homologada en fecha 18/11/10A todas luces dicho porcentaje resulta cuestionable, ya que resulta inconcebible que no amerite recalificación laboral, un estibador que tiene limitación funcional en su muñeca derecha y que perdiera la totalidad de la visión de su ojo izquierdo, sin contar que no evaluó en forma alguna el TEC con pérdida de conocimiento del actor, sumado a los problemas neurológicos y sicológicos que presenta el mismo como consecuencia directa del accidente. Por otro lado dicho informe resulta contradictorio con el informe realizado por el Dr. Alfredo Zottola que expresa: “Paciente de 31 años de edad, que consulta, por pérdida de visión en ojo izquierdo cefalea, limitación funcional de muñeca derecha y trastorno cognoscitivosDe lo expuesto se infiere, que hay un nexo causal indiscutible entre la afección que presenta el actor, el accidente producido, y la labora realizada al servicio de la demandada, esto sin contar con el reconocimiento expreso del accidente de trabajo por denuncia formulada por parte del empleador a la ARTEn consecuencia, para la reparación de los daños causados por el accidente denunciado en su capacidad laborativa y de vida, se promueve la presente demanda, a los efectos de lograr la reparación integral del daño sufrido, ya que la ART solo abonó parte el lucro cesante en base a los parámetros de la Ley de Riesgo de Trabajo”.

Respecto de la empleadora y codemandada SOMIALCA SERVICIOS SRL, ante la falta de contestación de demanda se hizo efectivo el apercibimiento establecido en el art. 58 del CPL, y por lo que -salvo prueba en contrario- corresponde tener por ciertos los hechos expuestos en la demanda. Así lo declaro.

Por su parte la ART codemandada al contestar demanda reconoció la vigencia de un contrato con la empleadora, por el cual le brindaba la cobertura de los términos de la ley 24.557 y luego especificó: “Mas allá de negar su existencia, en relación a las supuestas secuelas mencionadas por el actor, mi mandante no puede dejar de advertir que, en ningún momento, el accionante explicita sus argumentos por los que habría de reputar las actuales supuestas dolencias, en el caso en que se comprobara su veracidad, como consecuencias de las supuestas enfermedades que alega haber sufridoReconozco que el 18/11/10 se realizó la audiencia de Homologación en la OFICINA DE HOMOLOGACIÓN Y VISADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO donde se otorga al actor una incapacidad parcial y permanente del 49.9 %**Reconozco que el actor percibió por dicha incapacidad la suma de \$52.100**” (el resaltado del texto con negrita pertenece a origen).

Del análisis del plexo probatorio restante, surge que a fs. 211 a 212 se agregó el dictamen pericial médico realizado por el perito oficial Antonio E. Viola, en el marco de lo normado por el art. 70 del CPL, y allí se concluyó: “El Sr. Ariel Esteban Tapia, tiene una INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DE UN 67,28 % (SESENTA Y SIETE COMA VEINTE Y OCHO POR CIENTO), aplicando los Factores de Ponderación”.

A fs. 273 a 274, se agregó la contestación del oficio remitido a la Secretaria de Trabajo de Tucumán, y de allí surge que dicho organismo solicitó un plazo de gracia para contestar el informe requerido.

A fs. 276 a 278, se agregó la contestación del oficio remitido al Correo Oficial -la que no fue impugnada por las partes-, y de allí surge que se autenticaron las piezas postales remitidas.

A fs. 280 a 288, corre glosada la contestación al oficio librado a Superintendencia de Riegos del Trabajo -la que no fue impugnada por las partes-, y de allí surge que dicho organismo remitió el expediente administrativo perteneciente al actor y a fs. 289 consta agregado el dictamen de la Comisión Médica donde se consignó los datos de la incapacidad del actor.

A fs. 310 y 311, se agregaron respectivamente las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte actora Sres. Rodríguez Fabián Osvaldo y Lizárraga Segundo Leandro, los que no fueron tachados por las partes.

Surge de la declaración del Sr. Rodríguez que a la quinta pregunta -como le consta que la actividad del actor carecía de seguridad- contestó: “Si.- Todos los que trabajábamos ahí.- No teníamos seguridad, o teníamos cinturones, siempre trabajábamos con riesgo lo que hacíamos”.

Surge de la declaración del testigo Lizárraga que a la quinta pregunta contestó: “Si, carecía de seguridad, nosotros andábamos no nos daban nada para que nos pongamos arriba, andábamos en la altura, como 13 metros sin ninguna seguridad” (sic.).

A fs. 344 a 349, consta agregado el dictamen pericial médico realizado en el marco de la prueba ofrecida por el actor y la ART codemandada, la que no fue impugnada por las partes y de allí surge que el perito oficial Adrián Cunio concluyó: “A criterio de este perito la paciente, **ARIEL ESTEBAN TAPIA al momento del examen físico: Presente antecedente de TEC, DESORDEN MENTAL ORGANICO POSTRAUMÁTICO GRADO II, PERDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL DE OJO IZQUIERDO, LIMITACIÓN FUNCIONAL DE MUÑECA DERECHA SIENDO ESTE SU MIEBRO SUPERIOR HÁBIL que le produce incapacidad total y permanente (ILTP) del 67,35% (con ponderaciones)**”.

Pues bien, aquí tengo en cuenta que por un lado el perito médico oficial Antonio E. Viola -en el marco del art. 70 del CPL-, concluyó que el actor padece incapacidad parcial y permanente del 67,28, mientras que a fs. 344/349 el perito medico oficial Adrián Cuneo -en el marco de la prueba ofrecida por el actor y la ART demandada- determinó con relación al actor una incapacidad del 67.35%.

Cabe mencionar que además de la similitud del porcentaje de incapacidad determinado en ambos dictámenes médicos de los peritos oficiales, tengo en cuenta que los mismos no fueron impugnados por las partes y que los profesionales fueron muy detallistas al mencionar los estudios médicos que tuvieron a la vista para la determinación de sus conclusiones, que también se ponderó el examen físico del actor y que la conclusión fue debidamente fundada por cuanto se basó para fijar el porcentaje en el baremo establecido en el decreto 659/96.

A diferencia de lo arriba referenciado con respecto a los dictámenes médicos, el porcentaje de incapacidad fijado en el dictamen de la Comisión Medica no cuenta con una fundamentación técnica suficiente pues allí solo se ponderó de manera escueta las lesiones y estudios sin vincular estos antecedentes con el porcentaje de incapacidad que se determinó.

Es por todo ello que considero que surge acabadamente fundado el porcentaje de incapacidad determinado en el dictamen del perito médico oficial de fs. 334 a 339, y por ello corresponde tener por acreditado que el actor como consecuencia del accidente de trabajo sufrido en fecha 19/09/09 posee una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 67,35%. Así lo declaro.

#### **CUARTA CUESTIÓN:** Responsabilidad civil de la empleadora SOMIALCA SERVICIOS SRL

Especificó el accionante en su demanda que se desempeñó como empleado temporario de SOMIALCA SERVICIOS SRL desde el 01/07/08, revistiendo la categoría de Estibador, cumplía su jornada en turnos rotativos de 08 a 14 hs. y luego afirmó: “Las tarea descriptas, fueron desarrolladas por nuestro instituyente sin ningún tipo de protección, ni elementos de seguridad para proteger sus manos y cuerpo. El 19 de Septiembre de 2009, el Sr. Tapia sufre un grave accidente mientras se encontraba estibando bolsas de azúcar a una altura aproximada de 16 mts. en el galpón de su empleador, perdió el equilibrio y cayó al piso, intentando amortiguar su caída poniendo sus brazos hacia delante, lo que no impidió que su cabeza impactara contra el suelo, lo que le produjo pérdida de conocimiento, fractura de muñeca derecha, fractura de piso orbitario, pérdida de visión en su ojo izquierdo, problemas neurológicos y traumatismos varios. En el momento del accidente el Sr. Tapia no contaba con elemento de seguridad alguno, a pesar de encontrarse trabajando a 16 mts. de altura. Luego del accidente el sr. Tapia fue intervenido quirúrgicamente de su muñeca derecha, y se le realizó reconstrucción del piso orbitario izquierdo produciéndose el cese de la Incapacidad Laboral Temporaria el día 19/09/10, otorgándosele un 49,9% de Incapacidad Parcial, Permanente y Definitiva, la que fue homologada en fecha 18/11/10A todas luces dicho porcentaje resulta cuestionable, ya que resulta inconcebible que no amerite recalificación laboral, un estibador que tiene limitación funcional en su muñeca derecha y que perdiera la totalidad de la visión de su ojo izquierdo, sin contar que no evaluó en forma alguna el TEC con pérdida de conocimiento del actor, sumado a los problemas neurológicos y sicológicos que presenta el mismo como consecuencia directa del accidente. Por otro lado dicho informe resulta contradictorio con el informe realizado por el Dr.



Alfredo Zottola que expresa: “Paciente de 31 años de edad, que consulta, por pérdida de visión en ojo izquierdo cefalea, limitación funcional de muñeca derecha y trastorno cognoscitivos. De lo expuesto se infiere, que hay un nexo causal indiscutible entre la afección que presenta el actor, el accidente producido, y la labora realizada al servicio de la demandada, esto sin contar con el reconocimiento expreso del accidente de trabajo por denuncia formulada por parte del empleador a la ART. En consecuencia, para la reparación de los daños causados por el accidente denunciado en su capacidad laborativa y de vida, se promueve la presente demanda, a los efectos de lograr la reparación integral del daño sufrido, ya que la ART solo abonó parte del lucro cesante en base a los parámetros de la Ley de Riesgo de Trabajo. Conforme lo manifestado ut supra venimos por la presente a reclamar la reparación integral del daño sufrido como consecuencia del siniestro producido, lo que debe comprender todos los aspectos de la vida del individuo o dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que sufran y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que realizaba como así también compensar de algún modo las expectativas frustradas. La reparación integral de los daños tiene raigambre constitucional establecida en el art. 19 de nuestra Carta Magna. La corte Suprema se ha pronunciado al respecto indicando que: “la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del C.C. consagra el principio general establecido en el art. 19 de la C.N. que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de terceros”.

Respecto de la codemandada SOMIALCA SERVICIOS SRL, se tuvo por incontestada la demanda a fs. 166 por lo que se hizo efectivo el apercibimiento prescripto en el art. 58 del CPL.

Asimismo, tengo en cuenta que la ART demandada en su responde de demanda reconoció ser la ART de la empleadora codemandada y que pagó al actor la suma de \$52.100 por un porcentaje de incapacidad parcial permanente definitiva del 49,9% dictaminado por la Comisión médica como consecuencia del accidente sufrido por el actor en fecha 19/09/09.

Entonces, de las postulaciones iniciales resulta que no se encuentra controvertida la existencia del accidente del actor en fecha 19/09/09, que lo fue en ocasión del trabajo, ni sus consecuencias dañosas, sino solo la responsabilidad por su producción.

Respecto de las circunstancias que rodearon al accidente -y relatadas por el actor en su demanda-, tengo en cuenta que se encuentra incontestada la demanda por parte de la empleadora y que la ART demandada se limitó a efectuar una negativa pero sin dar su propia versión de los hechos, y por lo que le cabe el apercibimiento previsto en el art. 60 del CPL. Así lo declaro.

Asimismo, tengo en cuenta que surge de la declaración del testigo Rodríguez que a la quinta pregunta -como le consta que la actividad del actor carecía de seguridad- contestó: “Si.- Todos los que trabajábamos ahí.- No teníamos seguridad, o teníamos cinturones, siempre trabajábamos con riesgo lo que hacíamos” (sic.), y de los dichos del testigo Lizárraga a la quinta pregunta surge que manifestó: “Si, carecía de seguridad, nosotros andábamos no nos daban nada para que nos pongamos arriba, andábamos en la altura, como 13 metros sin ninguna seguridad” (sic.).

En tal sentido, se ha sostenido que basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo de la demandada, como dueño o guardián del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (CSJN, 21/04/09, “Rodríguez, Ramón c/ Electricidad de Misiones S. A.”).

De allí que, al ser la víctima un trabajador dependiente y por haber ocurrido el hecho que produjo el daño -y cuya indemnización se demanda- en ocasión del servicio laboral que aquél prestaba a su empleadora, a los fines de la apreciación de la responsabilidad del empleador no podrá prescindirse de la aplicación del principio objetivo que emana del art. 1113, párrafo segundo, del Código Civil (vigente a esa fecha).

Entonces, a los fines de la determinación de la responsabilidad por el hecho dañoso, coincido con los precedentes jurisprudenciales en los que se establece que con la existencia de una relación laboral se introduce un elemento particular que debe valorarse en la consideración usual de la existencia de los presupuestos de dicha responsabilidad de derecho común, y exige afinar determinados conceptos jurídicos.

Al respecto, se ha sostenido jurisprudencialmente que las nociones de “guarda”, “cosa riesgosa”, “actividad riesgosa”, “culpa de la víctima”, etc. adquieren, dentro del marco de la ley civil, ribetes particulares al tratarse de un accidente de trabajo el hecho dañoso que da motivo a la acción.

Es que aún dentro del marco civil no pueden dejar de meritarse debidamente estos aspectos, so pena de arribar a soluciones disvaliosas y por consiguiente injustas.

Asimismo, no puede soslayarse que el trabajador carece de libertad para decidir con que tarea desarrollar. El sólo pone a disposición de su empleador su capacidad de trabajo -que es generalmente lo único con lo que cuenta- y recibe de éste las órdenes sobre que labor cumplir, con qué elementos y en qué condiciones.

De allí que el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas por la legislación vigente no constituye una cuestión ajena al marco normativo en que se ha trabado la litis. Una de las cuestiones a resolver es la determinación de la actividad a desempeñarse en el marco del contrato de trabajo, para lo cual debe tenerse en cuenta lo riesgosa que pudiere ser la actividad a desempeñar por el trabajador independientemente de la determinación del peligro que la “cosa” pueda representar en el caso concreto, en tanto presupuesto de la responsabilidad objetiva prevista en el citado art. 1113 de la ley sustancial.

Ello así, la responsabilidad está subordinada a la constatación de la causalidad adecuada entre la fuente de peligro y los daños resultantes.

La acción resarcitoria fundada en el riesgo de la cosa exige a los jueces de mérito valorar las circunstancias en que se produjo el evento; pues el peligro no sólo puede provenir de la naturaleza propia de la cosa, sino también de su utilización o empleo, o de la ubicación en la que se encontraba en el caso particular. Ello hace necesario un análisis de los antecedentes anteriores y concomitantes con la producción del evento, y de las circunstancias en que el mismo tuvo lugar, a fin de valorar la peligrosidad de las cosas involucradas; esto es, su aptitud para crear la probabilidad y consecuente previsibilidad de una contingencia dañosa (cfr.: CSJT, Sala civil y penal, “Lugones Félix Genaro c. S.A San Miguel A.G.I.C.I y F. s/ Daños y Perjuicios”, sent. 1001 del 26.11.01).

En el caso de autos, tenemos reconocido y declarado que el accidente se produjo en ocasión del trabajo.

En cuanto a las circunstancias en que se produjo el mismo, tengo en cuenta los apercebimientos de los arts. 58 y 60 del CPL antes aplicado respectivamente a las codemandada SOMIALCA SERVICIOS SRL y la ART codemandada y los dichos de los testigos, y sin que exista prueba en contrario que lo desvirtúe, es que tengo por ciertas las circunstancias denunciadas por el actor en su demanda con relación al modo en que se produjo el accidente. Así lo declaro.

En virtud de lo anterior, se tiene por cierto que el actor el día 19 de Septiembre de 2009, mientras se encontraba estibando bolsas de azúcar a una altura aproximada de 16 mts. en el galpón de su empleador, perdió el equilibrio y cayó al piso, todo lo cual le produjo las lesiones que le originaron la incapacidad declarada en autos. Así lo declaro.

En tal sentido, y atribuida la responsabilidad de SOMIALCA SERVICIOS SRL por su calidad de empleador (art. 1113 del C.C. vigente a la época), para que pueda quedar eximido de responsabilidad debía acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, y lo cual no surge acreditado en autos.

A su vez, en el caso de marras es dable entender que la actividad que el actor se encontraba desempeñando al momento del accidente constituía una actividad riesgosa -trabajo en altura-, y sin que para ello -y según surge de los testimonios obrantes en autos y sin prueba en contrario que lo desvirtúe- hubiera contado con los elementos de seguridad correspondientes, o hubiere acreditado la empleadora que hubiere adoptado las medidas de seguridad pertinentes, o capacitado al actor en el desempeño de las tareas riesgosas desarrolladas, y todo ello a fin de evitar el accidente o en su caso disminuir las consecuencias nocivas del mismo.

En virtud de lo anterior, cabe responsabilizar a SOMIALCA SERVICIOS SRL -en su calidad de empleadora- por los daños ocasionados al actor -y que resultaren en definitiva condenados- con motivo del accidente producido en ocasión de su trabajo en fecha 19.09.09. Así lo declaro.

#### **QUINTA CUESTION:** Responsabilidad de la ART demandada

Con respecto a la responsabilidad civil de la ART expresó el accionante en su demanda: “En ese carácter se hace extensiva la responsabilidad civil por daños y perjuicios que se reclama en autos conforme lo dispuesto por el Art. 4° De la ley 24.557, Dto. 170/96 con fundamento en lo dispuesto por los arts. 1074, 1068 y 1078 del C.Civil El art. 103 del Dcto. 351/79 prescribe que las “máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, deberán ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección adecuada” Ninguna de estas previsiones fueron adoptadas por la empresaria y su incumplimiento no fue controlado ni denunciado por la aseguradora

de riesgo del trabajo, por lo que existe un nexo de causalidad adecuado entre la omisión en la que se ha incurrido y el daño sufrido por mi instituyente. Se denunció ut supra, el incumplimiento del empleador de las normas de higiene y seguridad en el trabajo y que no fuera controlado por la ART conforme la obligación legal impuesta por el art. 4° de la ley 24.557.- De haberse cumplido mínimamente con alguna de las normas de seguridad referida, el accidente no hubiera ocurrido. Por su parte, El Dcto. 170/96 reglamentario del art. 4° de la ley 24.557 obliga a las ART a realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo (art. 19). En especial se fijan las siguientes: "1.- Vigilar la marcha del plan de mejoramiento en los lugares de trabajo, y la verificación del mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el mismo. 2.- Brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (art. 19 inc. c) La ausencia de prevención por las empresas y de control y denuncia de las ART ha originado el crecimiento de víctimas fatales y con consecuencias psicofísicas graves en accidentes del trabajo conforme se refleja en numerosos y recientes artículos periodísticos.- Las ART están obligadas a denunciar a las empresas que no cumplan con las normas de seguridad, pero muchas veces, como reconocen las propias aseguradoras, se privilegia la relación comercial -no perder un cliente antes que el estricto cumplimiento de la ley.- No cabe duda sobre la responsabilidad omisiva de la aseguradora demandada en los términos del art. 1074 del Código Civil y con idéntica extensión y montos que el restante codemandado en cuanto debió controlar en el caso concreto de autos, el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad por la empleadora del actor (art. 4°, inc. 1° y 4° de la Ley 24.557) a los fines de evitar la producción del evento dañoso. Pese a encontrarse el art. 1074 del C.C. dentro del capítulo "De los delitos", la norma no se refiere a esos hechos, sino a un caso de cuasidelito por omisión (conf. Llambías, Tratado de Obligaciones T II p. 619), surgiendo ello del término "ocasionado" que emplea la misma norma.-En efecto ante el pedido de declaración de inconstitucionalidad del procedimiento que establece la ley 24.557, y como en esta demanda se reclama el resarcimiento integral de los daños que le fueron provocados al actor, al pago del lucro cesante, puede V.S. condenar a la aseguradora de riesgo codemandada, en los términos de ley 24.557, pues el pago de la indemnización es equivalente al rubro lucro cesante, de acuerdo a lo indicado en el caso "Aquino", en los votos de los Dres. Petracchi y Zaffaroni(sic.)".

La ART codemandada reconoció en su responde de demanda que se vinculó con empleadora del actor por medio de un contrato por el cual se obligaba a brindar las prestaciones establecidas en la ley 24.557.

A continuación de ello, la ART demandada afirmó la inexistencia de una relación de causalidad entre el accidente y las supuestas secuelas, y agrega que el actor no explicitó cual sería el nexo de causalidad entre las supuestas dolencias y la enfermedad que alega sufrir y luego señala: "En cuanto a la aludida relación de causalidad, la misma implica que deben existir pruebas de orden clínico, patológico, epidemiológico, consideradas aisladas o concurrentemente, que permitan establecer una asociación CAUSA-EFECTO, entre la supuesta secuela y el desenvolvimiento de los hechos en torno a las enfermedades aludidas. Es necesario precisar una vez más, que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, incluida en el esquema de la LRT y, por consiguiente, como parte integrante de un subsistema de la Seguridad Social, tiene funciones específicas asignadas por la ley 24.557 (Art. 26, inc. 3) que la responsable por las prestaciones en especie y dinerarias que otorga esta normativa (Capítulo IV y V, Arts. 11, 20 y cc), pero de ningún modo puede ser citada o emplazada en juicio por pretensiones que excedan dicho marco, es decir, para responder por una indemnización dentro del ámbito de la ley civil, marco legal invocado por la contraria".

Luego la ART demandada planteó defensa de falta de legitimación pasiva afirmando que el reclamo de la reparación civil a la ART no reúne ninguno de los requisitos que la normativa civil exige como fundamento para la pretensión del actor, en virtud de que no es dueño ni guardián de la cosa productora del daño, ni el mismo ha sido ocasionado por sus dependientes, aclarando que para casos de accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores se encuentra normado un régimen de reparación especial reglamentado en la ley 24.557, como consecuencia de ello la ART no debe responder por una indemnización dentro del ámbito del derecho común.

Especificó la codemandada que el único contrato de afiliación suscripto entre ella y la empleadora únicamente cubre a la que esta dentro del sistema previsto en la LRT, por lo que la acción intentada por el actor no posee sustento legal alguno y por ello ha de acogerse el planto de falta de legitimación pasiva rechazando la pretensión del actor con relación a la ART demandada.

Al respecto, y recordando la ya declarada inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT, considero que una eventual responsabilidad como la aquí reclamada, para que sea imputable a la aseguradora de riesgo de trabajo en el marco del derecho común -ya sea por el daño patrimonial o moral- debe reconocer relación causal adecuada con la omisión o cumplimiento deficiente de las obligaciones legales que la ley 24.557 y sus normas reglamentarias y complementarias establecen pues, si bien en principio dicha responsabilidad patrimonial solo habrá de ceñirse a las prestaciones dinerarias o

en especie impuestas por la LRT, cuando lo que se reclama es precisamente el incumplimiento de dichos deberes, y consecuentemente los supuestos daños tuvieren relación causal adecuada con la antijuridicidad que se le atribuye con base en la culpa, se podrían configurar los presupuestos básicos de la responsabilidad civil.

Es que si bien la responsabilidad de la ART no debe exceder de la asumida al contratar el seguro, también es cierto que ello lo será siempre y cuando ella no incurra en un comportamiento dañoso subsumible en alguno de los subsistemas de responsabilidad diseñados por el mencionado Código Civil (arts. 1073, 1074 y 1109), con la concurrencia de los elementos de la relación de responsabilidad: ilicitud, daño, relación causal y factor de imputación legal.

De allí que no luzca legítima la limitación a la responsabilidad invocada por la aseguradora codemandada al pretender eximirse de toda obligación derivada del derecho común a través de la existencia de un contrato entre ella y la empleadora y por considerarlo inoponible al trabajador, y por lo que la ART codemandada resulta legitimada para ser demandada en autos según dichas normas.

Se tiene dicho en tal sentido que: “Son inoponibles las cláusulas exonerativas de toda responsabilidad indemnizatoria, pues de lo contrario quedaría insatisfecha la estructura y finalidad del seguro especial de accidentes (C.Nac. Trab., sala 5, 16/7/1999 -Basso Heriberto S v. Mastellone Hnos. S.A)”, o también, que “Resultan inoponibles al trabajador, sin perjuicio de la ulterior acción de repetición del asegurador contra su asegurada, las defensas nacidas de la póliza y no del siniestro, toda vez que el tercero resulta ajeno a las cláusulas pactadas entre los obligados (C.Nac Trab., sala 9, 28/5/1997 - Ignelz, Enrique L c. Limpiolux S.A)”.

En virtud de lo anterior es que las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo son pasibles de ser demandadas por el trabajador por una eventual responsabilidad como la aquí imputada, y por lo que corresponde el rechazo de su planteo de falta de legitimación pasiva. Así lo declaro.

Declarado lo anterior, cabe entrar al análisis de la responsabilidad imputada por el actor a esta codemandada y sobre la cual basa la demanda instaurada en su contra.

Con anterioridad se ha declarado la responsabilidad del empleador por el accidente en su carácter de dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño y en virtud de no haber cumplido con las medidas de seguridad impuestas para este tipo de tareas y el empleo de esos elementos de trabajo.

Tengo en cuenta que la responsabilidad de las aseguradoras de riesgo de trabajo no se limita a la recomendación a los empleadores afiliados de las medidas de seguridad e higiene a adoptar para prevenir siniestros sino que va más allá de ello debiendo también hacer un seguimiento y control del cumplimiento de las mismas.

Es que la circunstancia de la existencia de un organismo de control superior no la exime del cumplimiento de sus obligaciones de prevención y de control, y la falla en las mismas las pueden responsabilizar solidariamente a las ART por lo daños que se hubieren causado como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, y las que vienen dadas por la ley 24.557 (arts. 1 y 4) y dcto. Reglamentario 170/96.

Se tiene así dicho que: “...Las ART tienen la obligación legal de supervisar el cumplimiento de las condiciones mínimas y básicas en materia de higiene y seguridad en el trabajo. La preceptiva sobre riesgos laborales introduce una suerte de delegación del control del acatamiento a las disposiciones sobre higiene y seguridad en cabeza de las aseguradoras, generando así una ampliación de los sujetos responsables, en modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto de imputación, aunque, es claro, con alcances e intensidades diferenciadas, siendo aquella función cuasi estatal la que, en caso de omitirse o de cumplirse deficientemente, puede generar responsabilidad, más allá de cual sea, en concreto, el vínculo o nexo de causalidad adecuada para efectivizarla (Corte Sup., 3/12/2002 - Rivero Mónica E. por sí y en representación de sus hijos menores v. Techo Técnica SRL)”.

Tengo aquí en cuenta las circunstancias en que se produjo el accidente en cuestión, cuya mecánica si bien fue negada por la ART codemandada, ella no dio su versión de cómo habría sido el accidente y por lo que -en virtud de lo prescripto en el art. 60 del CPL- cabe tener por verosímil la descripción formulada por el actor en su demanda. Así lo declaro.

Entonces, y acreditado que quedara que el actor realizaba tareas riesgosas, la ART codemandada no ha acreditado -a pesar de haber tenido la carga probatoria de su demostración- la adopción de algún plan de medidas de prevención o disminución de riesgos para su afiliado/empleador -capacitaciones, entrega de elementos de seguridad, etc.-, ni consecuentemente, un seguimiento y

control de su cumplimiento, teniendo en cuenta que el actor desarrollaba tareas en altura como estibador y que -conforme surge de las declaraciones de los testigos- lo hacía sin ningún elemento de seguridad.

De manera tal que resulta suficientemente acreditada la existencia de un nexo causal entre la omisión de la aseguradora de sus funciones de contralor y seguimiento antes señaladas y la producción del daño sufrido por el actor -y que le originara una incapacidad total permanente del 67,35%-, y por lo que la misma resulta solidariamente responsable con la empleadora por los rubros indemnizatorios que resultaren condenados en autos por el accidente de fecha 19.09.09. Así lo declaro.

## **SEXTA CUESTIÓN:** Rubros e importes reclamados

Consideración aparte merece formularse en relación a la determinación de la base de la remuneración que se tomará en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones que prosperasen, a las que deberán adicionarse los rubros no remunerativos previstos en el CCT que rige la actividad, resultando ello procedente en virtud del criterio sustentado en sentencia “Pérez Aníbal Raúl c/ Disco S.A, de fecha 01.09.2009” al que nos adherimos en cuanto dichos rubros forman parte del salario y deben ser considerados al momento de su determinación.

Ello así por cuanto se ha dicho en el fallo mencionado: “El art. 14 bis, al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, y al señalar la serie de derechos y libertades que estas últimas “asegurarán al trabajador”, refiere al salario, retribución o remuneración, de manera directa: retribución justa, salario mínimo vital, igual remuneración por igual tarea, participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. También lo hace, indirectamente al mentar el descanso y vacaciones pagadas, la protección contra el despido arbitrario y la garantía de los gremios de concertar convenios colectivos de trabajo. En lo relativo a los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22, segundo párrafo), el salario ha ocupado plaza en la Declaración Americana de Derechos y Deberes el Hombre (art. XIV), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23), en el Pacto Internacional de derechos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc. Arts. 6 y 7), en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (art. 5 inc. e) y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11 inc. 1° d)”.

Y que “Es indudable que “salario justo”, “salario mínimo vital móvil”, entre otras expresiones que ya han sido recordadas, bien puede ser juzgados, vgr. En punto a la relación adecuada entre los importes remuneratorios y las exigencias de una vida digna para el empleado y su familia, también lo es que, además de ello, el salario se proyecta con pareja intensidad a otro costado de la dignidad del trabajador. Se trata, en breve, de que es preciso y necesario que a la persona trabajadora le sea reconocida, de manera tan plena como sincera, que se ha “ganado la vida” en buena ley, que toda ganancia que obtiene del empleador con motivo o a consecuencia del empleo, resulta un salario, una contraprestación de este último sujeto por esta última causa. Atento a que la noción de remuneración que ha sido enunciada en manera alguna podría entenderse de alcances menores que la acuñada en el art. 1 del Convenio n° 95 sobre la protección del salario, es oportuno hacer cita de las observaciones dirigidas a la República por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, vale decir, el órgano instituido por resolución adoptada por la Conferencia Internacional de Trabajo en su octava reunión (1926), destinado a ejercer el control regular de la observancia por los Estados Miembros de la obligaciones derivadas de los convenios que han ratificado. En efecto, a propósito del Convenio n° 95 dicha Comisión, expresa referencia al art. 103 bis. Le recordó a la Argentina el párrafo 64 del “Estudio general sobre protección del salario”, de 2003, en cuanto a que el art. 1 del citado convenio, si bien “no tiene el propósito de elaborar un modelo vinculante de definición del término salario, sí tiene como objeto garantizar que las remuneraciones reales de los trabajadores, independientemente de la denominación o cálculo, serán protegidas íntegramente en virtud de la legislación nacional, respecto de las cuestiones que tratan los arts. 3 a 15 del convenio. Es necesario que la legislación nacional proteja la remuneración del trabajo, cualquiera sea la forma que adopte, de manera amplia y buena fe (Conferencia Internacional del Trabajo, 97 reunión, 2008, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículos 19,22, y 35 de la Constitución).- Más todavía, con todo ello, el órgano Internacional en rigor, persistía o daba seguimiento a las censuras que había dirigido, en 1995, a los beneficios no remuneratorios de los decretos 1477 y 1478 de 1989 y 333 de 1993, “destinados a mejorar la alimentación del trabajador y de su familia” al concluir en “la existencia de un vínculo entre los beneficios dirigidos a mejorar la alimentación del trabajador y de su familia, y el trabajo realizado o el servicio prestado, en virtud de un contrato de trabajo. Estos beneficios -añadió- cualquiera sea el nombre que se le pueda dar (primas, prestaciones complementarias, etc), son elementos de la

remuneración en el sentido del artículo 1 del Convenio. (CSJN, "Pérez, Anibal Raúl c/ Disco S.A", 01.09.2009)".

En conclusión, resulta preciso y necesario que a la persona trabajadora le sea reconocido, de manera plena como sincera, que se ha "ganado la vida" en buena ley siendo que toda ganancia que obtiene el empleador con motivo o a consecuencia del empleo resulta un salario, y dichos reconocimientos y contraprestación sólo pueden y deben ser llamados, jurídicamente, salario, remuneración o retribución. Así lo declaro.

Pues bien, habiéndose determinado que por el accidente de trabajo de fecha 19/09/09, el actor sufrió lesiones que le generaron una incapacidad permanente definitiva del 67,35%, que son responsables por dichas consecuencias dañosas tanto la empleadora como la ART, corresponde ingresar al análisis de cada rubro indemnizatorio en particular.

Determinado lo anterior, y previo al análisis de cada rubro en particular cabe mencionar que tanto el actor en su demanda como la ART codemandada en su responde de demanda reconocieron el pago al actor como consecuencia del accidente de un importe de \$52.100, el que deberá ser descontado del total de la condena que aquí se declare procedente. Así lo declaro.

Conforme surge de la planilla inserta en su escrito de demanda, el actor reclamó de modo específico y cuantificado los siguientes rubros:

**DAÑO MATERIAL:** El actor cuantificó este rubro en la suma de \$320.000,00 y solicitó que para su calculo se tenga en cuenta el lucro cesante y que por su incapacidad el actor fue excluido de por vida del mercado labora, por lo que deberá considerarse para ello la edad de 75 años y no la edad de jubilación del mismo.

Pues bien, tengo en cuenta que el actor tenía 31 años al momento del accidente, que cumplía tareas como estibador, y que como consecuencia de ello se le produjo -conforme lo declarado en la presente sentencia- una incapacidad del 67,35%.

Tengo también en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional al postular que "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL, del 8 de abril de 2008) y puntualizando que "La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable".

También se ha expresado en diversos pronunciamientos vinculados con infortunios laborales en el contexto indemnizatorio del Código Civil, que la incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste "un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc.", y que, por el otro, "debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de [la] actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable" (Fallos: 308:1109, 1115 y 1116). De ahí, que "los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos -aunque elementos importantes que se deben considerar- no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio" (Fallos: 310:1826, 1828/1829).

Igualmente, se ha destacado que en el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance", cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos: 308:1109, 1117).

Asimismo, en los precedentes de la C.S.J.N., "Aquino", "Milone" y "Aróstegui" se ha señalado que la prestación dineraria prevista en la ley 24.557 sólo indemniza daños materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancias, que asimismo, evalúa menguadamente.

También, que conforme surge de los distintos antecedentes jurisprudenciales citados, la utilización de la denominada "fórmula Vuotto" para calcular adecuadamente el quantum indemnizatorio en

concepto de daño material en las acciones por accidentes donde se reclama un resarcimiento con base en el derecho común (fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 16 de junio de 1978, recaído en los autos "Vuoto, Dalmero vs. AEGT Telefunken"), ha quedado ya denostado por la Corte Nacional en el fallo "Arostegui" (CSJN, 8/4/2008), motivando el casi inmediato fallo de la Sala III de la CNAT en "Mendez v. Mylba" (28/4/2008), que *aggiorna* aquella fórmula a lo que -entiende- son los requerimientos del Alto tribunal para asegurar su viabilidad.

Es así que según ciertos doctrinarios (Ahuad Ernesto J., 12/2008, Id Infojus: DACC080102), en lo que hace a la edad tope con la que se aplique la fórmula, se introduzca una modificación elevándola de 65 a 75 años teniendo en cuenta el fin de la "vida útil" de la víctima, y lo que así se calculará en este caso. Así lo declaro.

En consecuencia, en virtud de lo hasta aquí expuesto, atento las declaraciones anteriores y habiendo quedado fijados los parámetros para el cálculo de los rubros indemnizables y comprendidos bajo el concepto más amplio de "daños materiales", es que corresponde hacer lugar a los mismos con el alcance antes determinado, y cuya cuantía se determinará en la planilla que forma parte de esta sentencia. Así lo declaro.

DAÑO MORAL: En relación al "DAÑO MORAL", manifestó el actor para la determinación de su cuantía debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio, la índole del hecho generador, la entidad del sufrimiento causado y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material y luego lo cuantificó en la suma de \$100.000,00.

Asimismo, el actor reclamó en concepto de DAÑO ESTETICO el importe de \$12.000,00 y el que será analizado dentro del rubro DAÑO MORAL, según más abajo se considerará.

Pues bien, respecto del rubro "daño moral", cabe recordar que éste comprende el "Pretium dolores" que involucra el dolor físico de la víctima y el daño moral que se refleja en el sufrimiento -no físico- de la víctima, el daño a la vida de relación (privación de satisfacciones) y otros como el daño estético (comprensivo del dolor que le provoca a una persona joven la conciencia de su propia decadencia).

La responsabilidad resarcitoria por daño moral puede producirse en dos ámbitos diferentes, uno es el contractual y otro el extracontractual (como en nuestro caso).

En el ámbito extracontractual la discrecionalidad del Juez tiene mayor amplitud, libertad y posibilidades para encontrar parámetros para determinar el quantum del daño moral y también del daño en general, que en el ámbito contractual. Si bien ese dolor que se manifiesta en el plano emocional no resulta compensable en forma matemática, es dable instrumentar un mecanismo indemnizatorio que permita mitigar, por medio de bienes que propicien placer a la víctima, la tristeza que las lesiones le causaron.

Nuestra Excma. Corte local ha señalado que "el amplio debate acerca de la valoración judicial del daño moral y las pautas a considerar por el juzgador evidencia la complejidad del problema" y que "el repaso de las distintas posiciones doctrinarias, de los precedentes jurisprudenciales, su evolución y la situación actual del debate, conduce a sostener que efectivamente, al momento de determinar la cuantía del daño moral, los jueces deben brindar parámetros objetivos que justifiquen el criterio adoptado, como por ejemplo, la entidad del perjuicio sufrido por la víctima, su situación personal y las particularidades del caso que emergen de la prueba arrimada (edad a la víctima, sexo, condición social, particular grado de sensibilidad, índole de las lesiones sufridas, pluralidad de intereses lesionados, la incidencia del tiempo, la repercusión del hecho, etc.) (CSJT, sent. 331 del 14/5/2008, "Leguina de Gordillo María Isabel vs. Brizuela de Madrid Elena Graciela y otros s/ Especiales (Residual)" [http://jurisprudencia.pjtuc.gov.ar/busc\\_jurintr\\_01g.asp?registro=00023979](http://jurisprudencia.pjtuc.gov.ar/busc_jurintr_01g.asp?registro=00023979)).

En tal sentido, teniendo en cuenta -tal cual ha quedado acreditado en autos- las circunstancias objetivas del caso, el daño tanto físico como psíquico producido, su edad, las consecuentes secuelas y padecimientos sufridos por el actor, es que corresponde declarar la procedencia de este rubro (daño moral y daño estético) en la cuantía reclamada (\$112.000) a partir de la fecha del accidente (19.09.09). Así lo declaro.

COSTAS: Por el principio objetivo de la derrota, se las impongo en su totalidad a las demandadas vencidas (art. 105 -primera parte- del CPCC supletorio). Así lo declaro.

INTERESES: Atento la Doctrina Legal sentada por nuestra C.S.J.T. en sentencia n° 1422/2015 del 23/12/2015 "Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones" donde se ratifica la decisión del Alto Tribunal de abandonar su anterior doctrina sobre la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJT, sentencias N° 937 del

23/09/14, N° 965 de fecha 30/09/14, n° 324 del 15/04/2015, entre otras) y en consideración a que los jueces deben dictar pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes, pronunciando la siguiente: "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago" (Dres. GANDUR -dis. parcial- GOANE -dis. parcial- SBDAR -POSSE-PEDERNERA), esta vocalía considera que deviene razonable la aplicación de dicha tasa activa en base a lo considerado y a lo dispuesto por el art. 622 del Código Civil para los rubros condenados salvo el rubro daño moral el que es declarado con el dictado de esta sentencia. Así lo declaro.

#### **VOTO DEL SR. VOCAL SEGUNDO CARLOS SAN JUAN:**

Que vengo respetuosamente a disentir con el voto de la Vocal Preopinante en los siguientes puntos:

##### **1. Responsabilidad civil de GALENO ART S.A:**

Respecto a la ART cabe admitir la excepción de falta de legitimación pasiva entablada en contra. La procedencia formal de la acción civil no depende simplemente de la genérica invocación de responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo sino que, es de absoluta necesidad que dicha responsabilidad sea sustentada en normas de derecho civil, lo que no acontece en autos. Cabe recordar que si se optó por la acción civil en un reclamo por accidente de trabajo, deben considerarse desplazadas a las leyes laborales (Sup. Corte Bs. As., 24/11/1999, "Olivero, Omar F. vs. Alfano Antonio y Otros"). También resulta oportuno acotar que la empleadora bien pudo haber contratado un seguro que incluya la responsabilidad civil y así encontrarse asegurada ante una acción civil como la presente.

Cabe apuntar que cualquiera sea la calificación o naturaleza jurídica del contrato de seguro (estipulación a favor de un tercero o en beneficio de la empresa), este no puede ser modificado por el asegurado ni por una ley sin afectar el derecho de propiedad de la aseguradora, quien asumió una obligación de contenido patrimonial expresamente convenida y calculada en base a las disposiciones legales vigentes al momento de la celebración.

La delimitación causal, temporal y espacial del riesgo se hallan contenidas -expresa o tácitamente- en condiciones de póliza que importan exclusiones de cobertura. Se trata de supuestos que no se hallan garantizados por el asegurador y por los que el asegurado no afrontó el pago de prima alguna. En razón que el damnificado reviste condición de tercero frente a las partes sustanciales del contrato de seguro, le son oponibles unas y otras: las cláusulas delimitativas del riesgo, como ser, las exclusiones de cobertura así como los topes de garantía y franquicias (CNCiv., sala H, 21-VIII-1996, "Hamud, B. c. Telefónica de Argentina", ED, Boletín nro. 4/1996 de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, p. 36; CNCiv., sala H, 26-XII-1996, "Herrera, V. c. Portillo, N.", LA LEY, 1997-C, 994, J. Agrup., caso 11.549; ST Misiones, 13-IV-1998, "Acosta, F. c. Casola, R.", LA LEY, 1999-F, 794 (42.234-S); CNCiv., sala K, 10-10-2002, "Chamorro C. c. Soto J.", LA LEY, 2002-F, 598; RCyS, 2002-1060; CNCiv., sala C, 20/11/2003, "Rodríguez L. c. Gamarra W.", RCyS, 2004-319; CNCom., sala B, 30/06/2005, "Albarenga D. c. Expreso Caraza", LA LEY, 2005-F, 712; DJ, 2006-1-1111).

Habrá de tenerse presente que ello resulta de la previsión contenida en el Art. 118 de la Ley de Seguro ya que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador "en la medida del seguro", debiendo ello entenderse como entidad cuantitativa referida a los límites económicos de garantía asegurativa, como así a la delimitación subjetiva y objetiva del riesgo

El principio general de la relatividad de los contratos surge de la definición misma de la institución: "Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos" (art. 1137, Cód. Civil). La expresión "sus derechos" pone en evidencia que la declaración de voluntad común sólo regula las relaciones jurídicas de las partes que la emitan. O, dicho con otras palabras, las manifestaciones negociales atañen a los sujetos sustanciales de la relación contractual. Ocurre que si el contrato, por definición, es la resultante -predominantemente- de declaraciones que se desenvuelven en el marco de la voluntad privada, ellas no son factibles de producir efectos, en principio, más que con relación a las personas que las han emitido.



Este principio se ve reforzado, en lo que atañe al tema que nos ocupa, por los arts. 1195 y 1199 del Cód. Civil. El primero, cuando establece que "Los contratos no pueden perjudicar a terceros" y el segundo cuando afirma que "Los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos...". En síntesis, el contrato rige la relación jurídica entre los otorgantes. No puede perjudicar ni oponérsele a terceros, quienes tampoco pueden invocarlo en su favor. Que el contrato no puede ser invocado por los terceros implica que éstos no pueden aducir derechos contra las partes otorgantes.

En los hechos, con la redacción suministrada a los Arts. 1195 y 1199 del Cód. Civil, nuestro codificador reprodujo conceptualmente el texto de los Arts. 1134 y 1165 del Cód. Civil francés, a su vez inspirado en el pensamiento de Aubry y Rau que, sobre el particular, sostienen que se debe considerar como terceros, en el sentido de esta regla, a las personas que no han figurado personalmente en una convención y en la cual no han estado representadas ni por su autor ni por un mandatario ni por un gestor de negocios.

En consecuencia, el principio general que se extrae de la lectura de la doctrina clásica francesa, fuente de la nuestra, es que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No producen efecto respecto de terceros (Arts. 1134 y 1165, Cód. Civil). En síntesis, la doctrina francesa -cuya influencia fue ostensible-, afirma, en función de los preceptos enunciados, que nadie puede sin su consentimiento, ser deudor de una obligación que no le haya sido impuesta por la ley, ni tampoco obligarse a la prestación de un servicio o a la entrega de un valor, sin haberlo querido. En otras palabras, la responsabilidad patrimonial de las ART no puede ir más allá de la medida del seguro.

Para que se extienda la responsabilidad civil a la ART es menester que se demuestre que se ha suscripto la póliza adicional por responsabilidad que expresamente se ha creado al efecto por el sistema de seguros.

## **2. Cuantificación del Daño Materia y Daño Moral:**

### **A) Daño material:**

Bajo este rubro la demanda pretende el resarcimiento por los perjuicios económicos causados por la incapacidad sobreviniente sufrida por el actor. Esa reparación tiene por finalidad cubrir las limitaciones patrimoniales de tipo económico causadas por el daño a su capacidad productiva y que reducen su capacidad vital y empobrecen sus perspectivas económicas futuras como el daño material, el lucro cesante y la pérdida de chance. Pero además, tiene por finalidad reparar los daños que repercuten en su vida social, deportiva, etc, a través de la reparación por daño moral, el que se trata seguidamente en el rubro pertinente reclamado en la demanda (Fallos 308:1109, 115 y 116 y CNCiv., Sala F, 15-5-2000, "NN c/Municipalidad de Buenos Aires).

En el caso de autos, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de este concepto contra el empleador únicamente, conforme lo tratado. A los fines de su cuantificación deben considerarse el perjuicio económico que la minusvalía provoca en la capacidad de ganancia del trabajador, atendiendo a su remuneración, el porcentaje de incapacidad respecto de la total obrera y su edad a la fecha del infortunio y el tiempo que falta hasta que el trabajador pueda obtener el beneficio jubilatorio.

A tales efectos se tiene en cuenta el criterio establecido por la doctrina judicial que sostiene que "Los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos -aunque elementos importantes que se deben considerar- no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no solo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio (Fallos: 310:1826, 1828/1829)

Esos criterio permiten fijar el "quantum" reparador que, como tal, debe compensar la pérdida de capacidad de ganancia del actor durante el lapso de su vida laborativa que provoca la incapacidad desde la edad del trabajador al momento del accidente (31 años) hasta el momento en que el trabajador se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria (65 años).

Atento a ello habrá de considerarse el sueldo que hubiera percibido el trabajador si hubiese trabajado hasta obtener la jubilación ordinaria, o sea por el lapso de 34 años. En mérito a lo expuesto estimo equitativo imponer el pago de la suma que determina la planilla pertinente.

## B) Daño moral y estético:

Cabe destacar que el daño estético no configura un rubro indemnizatorio autónomo respecto del daño moral, por lo que será cuantificado junto con el daño moral.

El trabajador tiene derecho a este concepto, contra el empleador únicamente, por encontrándose acreditado sus padecimientos a raíz del accidente sufrido y la consecuente pérdida de capacidad laboral, tal como surge de la pericia médica. Si bien en el caso no hay pericias psicológicas realizadas al trabajador, vale aclarar el reclamo por daño moral “debe tenerse por configurado *in re ipsa*, por la sola producción del episodio dañoso, que -más allá de las escasas secuelas incapacitantes derivadas del mismo-, importó un episodio traumático, que acarreó inevitables padecimientos y angustias a la demandante”. Así lo tiene dicho la doctrina judicial de la CSJN en el fallo “Baeza, Silvia Ofelia vs. Provincia de Buenos Aires y otros” (Fallos, 334:376 del 12/4/2011) y en “Migoya Carlos Alberto vs. Provincia de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios” del 20/12/2011 (Fallos, 334:1821).

Respecto a su cuantificación, la jurisprudencia mayoritaria ha seguido el criterio de que su monto no debe guardar relación con el daño material, de manera que queda librado a criterio de los jueces, quienes deben ponderar las características de cada caso (CSJN, sent. del 27/5/2003, “Sitja y Balastro Juan c/ Provincia de La Rioja s/ daños y perjuicios y CSJT, sent. del 24/4/2012, “Palma Delia Lucia c/ Sistelco SRL y otros s/ indemnizaciones”; idem CTT, Sala V, Sent. del 28/3/2014, “López de Bernachi Beatriz del Valle c/ Cía. Azucarera Los Balcanes SA - Ingenio La Florida s/ daños y perjuicios”).

En el caso particular de autos, estimo equitativo imponer el pago de la suma que determina la planilla pertinente.

## 3. Disidencia sobre la aplicación de la tasa activa en base a los siguientes argumentos:

A partir de la ejecutoriedad y firmeza de los fallos Olivares” y “Banuera” la fijación de la tasa de interés de uso judicial queda sujeta a la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales

Límites legales y procesales a la facultad de los jueces para fijar la tasa de interés. La facultad judicial para fijar la tasa judicial tiene límites legales y procesales.

a) Legales: La ley 25.561 mantiene los mecanismos desindexatorios o la prohibición de indexar la economía y por ende los créditos laborales no obstante la derogación de los artículos 8° y 9° y la reforma de los Arts. 7° y 10 de la ley de convertibilidad. Supongamos un juicio laboral cuya tasa de interés debe ser calculada entre el 01/01/10 al 30/09/1, (cuatro años y meses dura en promedio un juicio laboral ordinario) en donde tenemos los siguientes incrementos porcentuales: tasa activa: 95.56%; tasa pasiva: 62.70% y costo de vida (índices oficiales) 65.80%. El techo o lo prohibido por la ley de emergencia económica es superar el 65.80% dado que prohíbe la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, por lo tanto la aplicación de la tasa activa esta violando la ley n° 25561.- Admitir lo contrario, significa que se puede violar la prohibición legal bajo el rótulo de tasa de interés y se permite que el deudor sufra las consecuencias de la multiplicación ilegítima de los valores adeudados. La doctrina de los autores sostiene que a partir de la prohibición legal de indexar, la función de los intereses judiciales es compensar por vía indirecta la pérdida de poder adquisitivo. La doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán, en la sentencia N° 476 del 6/12/93 al establecer que la aplicación de la tasa activa a los juicios laborales implica una evidente contradicción con las expresas prohibiciones contenidas en la ley 23.928, toda vez que la tasa activa resulta superior al índice de precios al consumidor. Además agrega el Supremo Tribunal, la tasa activa contiene un porcentaje o aditamento representado por el "gasto o costo" de intermediación en el mercado de dinero y una "utilidad razonable", por lo que no hay motivo alguno para reconocerle al trabajador dicha tasa por un negocio financiero que no ha acreditado realizar. En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido en la causa "López, A. M. c. Explotación Pesquera de la Patagonia" que: "La desindexación perseguida por la ley de convertibilidad mediante la supresión de los procedimientos de actualización sustentados en la utilización de indicadores, quedaría desvirtuada por la aplicación de la tasa activa, ya que ésta ha superado sustancialmente a los índices de precios, lo que produciría en el patrimonio del acreedor un enriquecimiento sin causa". Asimismo es la tasa adoptada por la CSJN para las causas que tramitan en su instancia originaria (cf. CSJ 457/1998 (34-S) ICS1 “Serenar S.,A. c/ Buenos Aires , Provincia s/daños y perjuicios”, del

19 de Agosto de -7-2004), a la que se consideró adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por el acreedor de créditos previsionales de naturaleza alimentaria (fallos . 327: 3721, 328: 2824, 3041, 4044, 329:6064, 6076, 330:4862 y 331:1329, 2538), habiéndose aplicado también para las deudas en concepto de retención de cuota sindical (fallos 329:5157), y de acuerdo a la reciente jurisprudencia emitida por tal tribunal (CSJN, 14/3/2017, "Bedino, Mónica Noemí el Telecom Argentina S.A. y otro si parto accionariado obrero"). Lo señalado permite concluir que los jueces de mérito pueden aplicar cualquier tasa de interés, menos la activa o aquella que la supere. Corresponde advertir que la doctrina judicial de la CSJN es de observancia obligatoria para los tribunales inferiores de la Provincia de Tucumán, por haberlo establecido mediante Sentencia 969 de fecha: 03/11/2005, recaída en los autos "ACEVEDO JACINTO MANUEL VS. JOSÉ MINETTI Y CIA S.A.C.I. S/ COBROS". Al sostener que: "Resulta oportuno destacar las sentencias de la Corte Suprema que deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos 245:429; 252:186; 255:119; 307:468; 312: 2187; - La Ley, 1990-B, 224-). La falta de leal acatamiento de lo resuelto por la Corte con anterioridad en la misma causa configura un agravio al orden constitucional, y el recurso extraordinario es la vía pertinente para restablecer el imperio de la decisión de rango superior que fue desconocida (Fallos 189:292- La Ley, 22-450-; 300:1144; 307:468). La obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emerge claramente de la regulación contenida en el art. 16 (2° parte) de la ley 48, en cuanto dicha norma instituye una herramienta para asegurar la supremacía de la decisiones de la Corte, en aquellos casos en que los tribunales inferiores se apartan de las directivas dadas para un caso concreto. El efecto vinculante de los fallos tanto de la CSJT como los de la CSJN tiene cuatro fundamentos: igualdad, puesto que si el fallo se dicta con intenciones de proyectarse en el tiempo, ese precedente hará que los litigantes tengan el mismo trato; previsibilidad, ya que si existe un precedente el cual debe obligatoriamente debe ser seguido por los tribunales ante casos similares los litigantes y la sociedad saben a que atenerse en el futuro; economía, porque si se aplican los criterios sentados en los casos previos, se ganará en tiempo y energía para resolverlos, y respeto, al acierto y sabiduría de los jueces anteriores. Con relación a los fallos de la CSJT que libera y delega en los jueces de mérito la fijación de la tasa de interés, los mismos no precisan a qué índices oficiales se refieren, dados que los publicados oficialmente, como lo señalé ut supra, son casi idénticos a la tasa pasiva promedio mensual; o dicho en otras palabras, la aplicación de esta tasa no afecta el poder adquisitivo según los índices

oficiales.

b) Procesales. Si el juez o tribunal dispone por sentencia fundada la aplicación de una tasa de interés a los fines de mantener incólume el contenido económico y el resultado obtenido supera el mecanismo indexatorio previsto en el Art. 276 de la ley de contrato de trabajo, derogado expresamente por los Arts.7 y 10 la ley de emergencia económica n° 25561, desvirtuando en los hechos el propósito perseguido por el legislador, la misma puede ser atacada desde dos puntos de vistas diferentes.

1) Por arbitrariedad, al no tomar en cuenta los datos objetivos de la realidad económica; esto es, que la fórmula aplicada (tasa activa) excede y desvirtúa la prohibición legal de indexar, ajustar por índices, variar por costos o repotenciar. En este supuesto, el juez cree ver un mecanismo simple de aplicación de intereses y no de repotenciación o indexación de la deuda, cuando en la realidad lo es. Recordemos la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto:" El mecanismo para mantener actualizado el capital sólo constituye un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la desvalorización monetaria, mas cuando el resultado obtenido se vuelve objetivamente injusto, debe ser dejado de lado, en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas". Agrega el Alto Tribunal "que si el monto ha excedido notablemente la razonable expectativa de conservación patrimonial y de lucro, la solución impugnada no puede ser mantenida so color de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada establecido oportunamente en la sentencia" (CSJN, causa "García Vázquez H. c. Sud Atlántica Cía. de Seguros" 22/12/92; ídem "Promar SAMI c. Prov. de Buenos Aires s/ daños y perjuicios" 13/2/90, ED, 137-429; ídem "Cukerman, Moises s/sucesión", 11/9/90, ED, 140-229; ídem "Juntalán Forestal Agropecuaria S.A. c. Prov. de Buenos Aires s/daños y perjuicios", 4/9/90).

2) Por inconstitucionalidad por fundarse en normas reglamentarias violatorias de los Arts. 76 y 99 inc. 2° de la Constitución Nacional, dado que el ajuste implica una indexación prohibida por la ley, afectando los derechos de:

I. Propiedad (Art. 17, Constitución Nacional) porque la misma se ve disminuida y afectada, en base a un mecanismo de reajuste inconstitucional, que desvirtúa el propósito del legislador.

II. Igualdad (Art. 16, Constitución Nacional) que impone mantener la paridad entre el acreedor y deudor laboral y que ni uno ni otro se perjudiquen o beneficien con un mecanismo espurio e ilegal

(aplicación irrazonable de la tasa activa). Algunos autores llaman "sacrificios compartidos en la emergencia económica". Asimismo en el caso de autos se da un trato diferencial a una causa con relación a otras que entraron en la misma fecha, en las que se aplicó la tasa pasiva promedio mensual.

III. Afianzar la Justicia (Preámbulo Constitución Nacional) entendida ésta como equidad (la justicia del caso particular) al no disminuir el juez la tasa mensual de interés a valores razonables de modo tal que no impliquen un restablecimiento de la indexación.

IV. Promover el Bien Común (Preámbulo Constitución Nacional) entendido éste como que en las vinculaciones entre los particulares reine el equilibrio y reciprocidad.

Inaplicabilidad de la tasa activa a los juicios laborales.

Independientemente de la jurisprudencia antes citada (la sentencia CSJT N° 476 del 6/12/93 y sentencia CSJN de fecha 10/06/1992, Fallos 315:1209), la CSJN (CSJ 1186/2012/CS1) ha mantenido con fecha 14 de Marzo de 2017 la tasa pasiva para los reclamos de carácter alimentario (causa "Bedino Monica Noemi vs. TELECOM ARGENTINA y otro s/part. Accionatiado obrero S..A."

Independientemente de lo citado, se debe destacar que la tasa activa tiene los siguientes rubros:

a) Costo que abona la entidad al inversor que colocó su dinero: --caja de ahorro plazo fijo etc.--: tasa pasiva.

b) La previsión por riesgo de incobrabilidad que más allá de la normativa que al respecto dictara el Banco Central, es de la propia subsistencia de la entidad hacerla, ya sea en forma particular tomando los distintos nichos de tomadores de créditos o por promedio.

c) La carga fiscal, que necesariamente debe ser incluida en el monto de la tasa, y que es fluctuante.

d) El costo de funcionamiento, que implica toda la infraestructura y recursos humanos que la entidad necesita para poder cumplir su rol con eficiencia.

e) La utilidad o ganancia del banco. Todos estos componentes no podrán ser justificados por los jueces para liquidar una indemnización trabajador . La República Argentina tiene uno de los spread (diferencia entre la tasa activa y pasiva) más altos del mundo ( 20 % ).

Son dos las variables fundamentales que inciden en el alto costo del dinero:

1) la ineficiencia del sistema bancario argentino: altos costos de operación mantenimiento de cuenta corriente, resumen de cuenta, mantenimiento de cajeros, etcétera, deficiente control del sistema y pasividad del poder político.

2) el sistema financiero argentino. La inflación es un flagelo económico que debe ser combatido en todos los campos. Si los bancos oficiales adoptan tasas de interés que resultan excesivas la remisión legal a dichas tasas, hace que los pronunciamientos judiciales instauren la usura en sus condenas. La doctrina de la Iglesia también combate las tasa de interés excesiva(a Aristóteles y Santo Tomás de Aquino (es injusto cobrar interés, y aunque podamos coincidir con Rodolfo Luis Vigo "Crisisfinanciera internacional: Aristóteles tenía razón", LL 2008-F-1391), o a los Papas León Magno (440), Gregorio IX (1234), Clemente V y el Concilio de Viena (1311), Sixto V (1586,es prohibido cobrar interés); o referirnos a las modificaciones posteriores hasta la autorización para cobrar intereses moderados (Benedicto XIV y la Bula Vix pervenit -1745-, y canon1543). Las tasas de interés altas, contribuyan al aumento de la litigiosidad más que las bajas; es que "la mejor inversión resultan los juicios", como bien se recordó la conocida expresión en los debates del artículo 297 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCC). Es porque los acreedores percibirán tasas que sólo los Bancos pueden pretender, pero sin los riesgos, gastos e inversiones de éstos.

Finalmente, se quiebra la igualdad ante la ley, por cuanto los fondos de desempleo, actualmente fondo de cese laboral para la industria de la construcción devengan la tasa pasiva promedio mensual (Banco Central de la República Argentina, Comunicación n° 9516 del 01/04/09). Cabe advertir que el nuevo Código Civil y Comercial prevee entre las tasas a aplicar por los jueces, las que surjan de las reglamentaciones del Banco Central de la R. A. (Art. 768 inc. c). **ES MI VOTO.**

#### **VOTO DE LA SRA. VOCAL TERCERA MARÍA A. POLICHE DE SOBRE CASAS:**

Esta Vocalía comparte los fundamentos que en disidencia expresa el Sr. Vocal Segundo Carlos San Juan, respecto de la cuestión de fondo debatida, adhiriéndome a los mismos y resultado arribado en

su voto disidente. Por lo que me pronuncio en idéntico sentido. Respecto de la disidencia sobre la aplicación de la tasa activa (punto 3), me adhiero al voto y fundamentos dados por el Sr. Vocal preopinante de aplicar la tasa activa. **ES MI VOTO.**

**PLANILLA:**

TAPIA ARIEL ESTEBAN vs SOMIALCA SERVICIOS SRL

Fecha de Ingreso: 01/07/2008

Fecha ILPP:19/09/2010Fecha Accid:19/09/2009

% Incapaci:67,35%Edad Fecha Accidente:31

CCTCateg: Estibador

**Sueldo Básico s/Recibo ( fs 3)\$ 1.150,00**

Planilla de Capital e Intereses de Condena

1- Daño Material\$ 342.340,05

2- Daño Moral\$ 68.468,01

\$ 410.808,06

Tasa Activa desde el 19/09/2010 al 31/01/2020265,98%\$ 910.556,06

**TOTAL Condena reexp en \$ al 31/01/2020\$ 1.321.364,12**

**COSTAS:**

Por la intervención en autos de la demandada SOMIALCA SERVICIOS S.R.L, por el principio objetivo de la derrota, a la demandada vencida (art. 105 -1° parte- CPCC supletorio).

Por la intervención en autos de la demandada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A., por el principio objetivo de la derrota, el actor vencido (art. 105 -1° parte - CPCC supletorio).

**HONORARIOS:**

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. 2 de la ley 6.204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la acción, es de aplicación el art. 50 inc. 1 de la ley citada, para la regulación de honorarios de los letrados de la parte actora por la demandada en contra de Somialca Servicios SRL, por lo que se toma como base regulatoria el monto del capital de condena, el que según planilla precedente resulta al 31/01/2020 la suma de \$1.321.364,12.

Para la regulación de honorarios por la intervención de la codemandada Galeno ART SA, es de aplicación el art. 50 inc. 2 de la ley 6204, por lo que se toma como base regulatoria el monto de la demanda actualizado (\$1.277.099,70) al 31/01/2020, al que aplicado el porcentaje del 30% de la normativa se obtiene el monto de \$383.129,91.

Determinadas las bases regulatorias y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los arts. 12,

14, 15, 38, 42, y concordantes de la ley N° 5480, con los topes y demás pautas impuestas por la ley 24.432 ratificada por la ley provincial N° 6715, regulo los siguientes honorarios:

Sobre la base de \$1.321.364,12

1) Al letrado **WALTER GUIDO IBAÑEZ**, por la actuación en la causa como letrado apoderado en el doble carácter por la parte actora, en una etapa del proceso de conocimiento, cumplida en forma compartida con la letrada Fernandez, en la suma de **\$47.789,34** (base $\times$ 14%+55%/3/2).

2) A la letrada **CARLA MARÍA FERNANDEZ**, por la actuación en la causa como letrada apoderada en el doble carácter por la parte actora, en una etapa del proceso de conocimiento, cumplida en forma compartida con el letrado Ibañez, en la suma de **\$47.789,34** (base $\times$ 14%+55%/3/2).

3) Al letrado **RUBÉN PABLO COPA**, por su actuación en la causa como letrado apoderado en el doble carácter por la parte actora, en dos etapas del proceso conocimiento, en la suma de **\$191.157,34** (base  $\times$ 14%+55%/3 $\times$ 2).

Sobre la base de \$383.129,91

1) Al letrado **RAFAEL RILLO CABANNE**, por su actuación en la causa como letrado apoderado en el doble carácter por la parte demandada Galeno ART SA, en las tres etapas del proceso conocimiento, en la suma de **\$83.139,19** (base $\times$ 14%+55%).

2) Al letrado **WALTER GUIDO IBAÑEZ**, por la actuación en la causa como letrado apoderado en el doble carácter por la parte actora, en una etapa del proceso de conocimiento, cumplida en forma compartida con la letrada Fernandez, en la suma de **\$5.938,51** (base $\times$ 6%+55%/3/2).

3) A la letrada **CARLA MARÍA FERNANDEZ**, por la actuación en la causa como letrada apoderada en el doble carácter por la parte actora, en una etapa del proceso de conocimiento, cumplida en forma compartida con el letrado Ibañez, en la suma de **\$5.938,51** (base $\times$ 6%+55%/3/2).

4) Al letrado **RUBÉN PABLO COPA**, por su actuación en la causa como letrado apoderado en el doble carácter por la parte actora, en dos etapas del proceso conocimiento, en la suma de **\$23.754,05** (base  $\times$ 6%+55%/3 $\times$ 2).

5) No regular honorarios al letrado **HÉCTOR JOSÉ GRANEROS**, por considerar que no existe actividad profesional que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).

Por lo tratado y demás constancias de autos, esta Sala III de la Cámara de Apelación del Trabajo:

### RESUELVE:

I°) **ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). II°) **HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- III°) **HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- IV°) **TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- V°) **COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- VI°) **REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos

treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- **VIIº) PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).-

**REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.-**

**ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI CARLOS SAN JUAN**

**MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS**

**ANTE Mí:**

**SERGIO ESTEBAN MOLINA**

Amep.

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: C 7 - CEDULA CAJA DE PREV. Y SEG. SOCIAL DE ABOGADOS PROCURADORES

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232193380

### CEDULA DE NOTIFICACION

San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2020.-

Cédula N° 4908

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS:** TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA. Expte N°: 620/12.

**Señores:** Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores

**Domicilio:** AVDA. 2 DE ABRIL N° 380 - P.B. - CIUDAD -

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ...**  
**RESUELVE:** I°) **ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). II°) **HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- III°) **HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- IV°) **TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- V°) **COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- VI°) **REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado



HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- **VIIº) PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE Mí: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**  
----- SJF

M.E. Nº ..... Recibido Hoy .....

Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador. Sr: .....

\_\_\_\_\_  
Secretario Jefe

San Miguel de Tucumán, .....de ..... en la fecha siendo horas .....  
..... Notifiqué del contenido de esta cédula.

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: C 3 - CEDULA JUSTICIABLE AL DOMICILIO REAL

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232193521

### CEDULA DE NOTIFICACION

Bono N°

San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2020.-

Cédula N° 4912

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS:** TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA. Expte N°: 620/12.

Se notifica a: GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO .S.A.,

Domicilio: 24 de septiembre 732, San Miguel de Tucumán

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ... RESUELVE:** I°) **ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). II°) **HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- III°) **HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- IV°) **TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- V°) **COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- VI°) **REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos

treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- VIIº) **PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**  
----- SJF

M.E. N° ..... Recibido Hoy .....

Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador. Sr: .....

\_\_\_\_\_  
Secretario Jefe

San Miguel de Tucumán, .....de ..... en la fecha siendo horas ..... Notifiqué del contenido de esta cédula.

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: C 5 - CEDULA JUSTICIABLE AL DOMICILIO REAL JUEZ DE PAZ

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232193534

Sr. Juez de Paz de DELFIN GALLO

### CEDULA DE NOTIFICACION

San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2020.-

Cédula N° 4913

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA. Expte N°: 620/12.**

**Se notifica a: TAPIA, ARIEL ESTEBAN**

**Domicilio: B°LA CARCEL WENCESLAO POSSE DELFIN GALLO - CRUZ ALTA**

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ... RESUELVE: I°) ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). **II°) HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- **III°) HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- **IV°) TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- **V°) COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- **VI°) REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y

un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- VIIº) **PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**  
----- SJF

M.E. N° ..... Recibido Hoy .....

Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador. Sr: .....

\_\_\_\_\_  
Secretario Jefe

San Miguel de Tucumán, .....de ..... en la fecha siendo horas ..... Notifiqué del contenido de esta cédula.

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: C 3 - CEDULA JUSTICIABLE AL DOMICILIO REAL

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232211022

### CEDULA DE NOTIFICACION

Bono N° 02069234

San Miguel de Tucumán, 06 de marzo de 2020.-

Cédula N° 5090

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS:** TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA. Expte N°: 620/12.

Se notifica a: SOMIALCA SERVICIOS S.R.L.,

Domicilio: SAN MARTIN 980, 7° B OF.B, SAN MIGUEL DE TUCUMAN

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ... RESUELVE:** I°) **ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). II°) **HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- III°) **HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- IV°) **TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- V°) **COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- VI°) **REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado

HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- **VIIº) PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**  
----- SJF

M.E. N° ..... Recibido Hoy .....

Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador. Sr: .....

\_\_\_\_\_  
Secretario Jefe

San Miguel de Tucumán, .....de ..... en la fecha siendo horas ..... Notifiqué del contenido de esta cédula.

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: CEDULA DIGITAL GENERICA APODERADO

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232193434

### CEDULA DE NOTIFICACION

Bono N°

San Miguel de Tucumán, 06 de marzo de 2020.-

Cédula N° 4909

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA - Expte N°: 620/12.**

**Se notifica al Dr.: RILLO CABANNE,RAFAEL**

**Domicilio Digital Constituido: 23148866279**

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ... RESUELVE: I°) ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). **II°) HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- **III°) HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- **IV°) TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- **V°) COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- **VI°) REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos



veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- VIIº) **PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**  
----- SJF

Firmado digitalmente por:  
CN=MOLINA Sergio Esteban  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 20183661826

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: CEDULA DIGITAL GENERICA APODERADO

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232193443

### CEDULA DE NOTIFICACION

Bono N°

San Miguel de Tucumán, 06 de marzo de 2020.-

Cédula N° 4910

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA - Expte N°: 620/12.**

**Se notifica al Dr.: IBAÑEZ, WALTER GUIDO**

**Domicilio Digital Constituido: 20178597060**

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ... RESUELVE: I°) ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). **II°) HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- **III°) HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- **IV°) TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- **V°) COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- **VI°) REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos

veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- VIIº) **PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**  
----- SJF

Firmado digitalmente por:  
CN=MOLINA Sergio Esteban  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 20183661826

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: CEDULA DIGITAL GENERICA APODERADO

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232193448

### CEDULA DE NOTIFICACION

Bono N°

San Miguel de Tucumán, 06 de marzo de 2020.-

Cédula N° 4911

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA - Expte N°: 620/12.**

**Se notifica al Dr.: COPA RUBEN PABLO**

**Domicilio Digital Constituido: 90000000000**

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ... RESUELVE: I°) ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). **II°) HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- **III°) HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- **IV°) TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- **V°) COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- **VI°) REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos

veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- VIIº) **PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**  
----- SJF

Firmado digitalmente por:  
CN=MOLINA Sergio Esteban  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 20183661826

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: CEDULA DIGITAL GENERICA APODERADO

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232253428

### CEDULA DE NOTIFICACION

Bono N°

San Miguel de Tucumán, 09 de junio de 2020.-

Cédula N° 5543

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA - Expte N°: 620/12.**

**Se notifica al Dr.: FERNANDEZ,CARLA MARIA**

**Domicilio Digital Constituido: 272796135479**

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ... RESUELVE: I°) ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). **II°) HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- **III°) HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- **IV°) TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- **V°) COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- **VI°) REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos

treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- VIIº) **PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- -----/SJF**

Firmado digitalmente por:  
CN=MOLINA Sergio Esteban  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 20183661826

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: CEDULA DIGITAL GENERICA APODERADO

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232320743

### CEDULA DE NOTIFICACION

Bono N°

San Miguel de Tucumán, 23 de julio de 2020.-

Cédula N° 6042

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA - Expte N°: 620/12.**

**Se notifica al Dr.: GRANEROS,HECTOR JOSE**

**Domicilio Digital Constituido: 90000000000**

### PROVEIDO

San Miguel de Tucumán, 16 de julio de 2020. Atento lo solicitado y en mérito al informe actuarial que antecede, no habiendo cumplido el letrado GRANEROS JOSÉ HECTOR con lo ordenado en proveído de fecha 03/07/2020, y haciendo efectivo el apercibimiento allí dispuesto, HÁGASELE SABER que las próximas notificaciones se realizarán de conformidad a lo dispuesto en el art. 75 del CPCyC, supletorio, en los ESTRADOS DIGITALES DE CÁMARA (Art. 4 Anexo Reglamento para notificaciones judiciales realizadas por medios digitales). Notifíquese al mencionado letrado la sentencia de fecha 21/02/2020 en los Estrados Digitales de Cámara. PERSONAL.- 620/12 FCT  
**Fdo: ADRIAN MARCELO R. DIAZ CRITELLI - "Vocal" QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-----/ SJF**



Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: CEDULA DIGITAL GENERICA APODERADO

Unidad Judicial: EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

ACTUACIONES N°: 620/12



H103232348221

### CEDULA DE NOTIFICACION

Bono N°

San Miguel de Tucumán, 06 de agosto de 2020.-

Cédula N° 6205

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 3

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA - Expte N°: 620/12.**

**Se notifica al Dr.: GRANEROS, HECTOR JOSE**

**Domicilio Digital Constituido: 90000000000**

### PROVEIDO

**S. M. de Tucumán, febrero 21 de 2020. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...CONSIDERANDO: ... RESUELVE: I°) ADMITIR** la demanda promovida por ARIEL ESTEBAN TAPIA, DNI N° 26.241.334, con domicilio en Barrio La Carcel -Wenceslao, Delfín Gallo Depto. Cruz Alta, Tucumán, en contra de SOMIALCA SERVICIOS SRL, con domicilio en San Martín N° 980, piso 7 depto. B, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. En consecuencia, se condena a esta última a que proceda, en el plazo de DIEZ días, al pago de la suma total de \$1.321.364,12 (pesos un millón trescientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro con doce ctvos) en concepto de indemnización por DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL (comprensivo del daño estético). **II°) HACER LUGAR** a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por MAPFRE ARGENTINA ART S.A. (hoy denominada GALENO ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.), con domicilio en calle 24 de Septiembre N° 732 de San Miguel de Tucumán en su escrito de responde y, en consecuencia, absolverla de la demanda iniciada en su contra, por lo considerado.- **III°) HACER LUGAR** al planteo del actor de la inconstitucionalidad del 39 de la ley 24.557, declarar abstracto el referido al art. 46, y rechazar los planteos inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 40 y cláusulas adicionales 1, 3 y 5 de la ley 24.557, por lo considerado.- **IV°) TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada por la ART codemandada en su responde de demanda.- **V°) COSTAS E INTERESES**, conforme a lo considerado.- **VI°) REGULAR HONORARIOS**, por sus actuaciones en autos a los letrados: “Sobre la base de \$1.321.364,12” le corresponde: 1) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 2) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$47.789,34 (pesos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con treinta y cuatro ctvos). 3) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$191.157,34 (pesos ciento noventa y un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro ctvos). “Sobre la base de \$383.129,91” le corresponde: 1) RAFAEL RILLO CABANNE, la suma de \$83.139,19 (pesos ochenta y tres mil ciento treinta y nueve con diecinueve ctvos). 2) WALTER GUIDO IBAÑEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 3) CARLA MARÍA FERNANDEZ, la suma de \$5.938,51 (pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y un ctvos). 4) RUBÉN PABLO COPA, la suma de \$23.754,05 (pesos

veintitrés mil setecientos cincuenta y cuatro con cinco ctvos). 5) No regular honorarios al letrado HÉCTOR JOSÉ GRANEROS, por considerar que no existe actividad que amerite su regulación (art. 16 de la ley 5480).- VIIº) **PLANILLA FISCAL** oportunamente practíquese y repóngase (Art. 13 Ley 6.204).- **REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- DR ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ CRITELLI - CARLOS SAN JUAN - DRA MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS - ANTE MÍ: SERGIO ESTEBAN MOLINA - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-**  
----- SJF

Firmado digitalmente por:  
CN=MOLINA Sergio Esteban  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 20183661826

Expediente: 620/12  
Carátula: **TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/**  
Descripción: **CEDULA DIGITAL - ESTRADO JUDICIAL**  
Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO VI**

---

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 620/12



H103062439854

### CEDULA DE NOTIFICACION

Expte. N° 620/12

Cedula N° 6369

San Miguel de Tucumán, 7 de octubre de 2020-

JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SEXTA NOMINACION

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA**

Se notifica a: **SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. -EN LA PERSONA DE SU REPRESENTANTE LEGAL-**

Domicilio: **ESTRADO JUDICIAL - 90000000000**

### PROVEIDO:

**"San Miguel de Tucumán, 23 de septiembre de 2020.-** Téngase presente la rectificación efectuada para su oportunidad.- Notifíquese conforme fuera ordenado mediante proveído de fecha 17/09/2020.- " Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO -Juez- **"San Miguel de Tucumán, 21 de septiembre de 2020.-** A lo solicitado, téngase presente para su oportunidad.- Notifíquese conforme fuera ordenado mediante proveído de fecha 17/09/2020.- " Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO - Juez- **"San Miguel de Tucumán, 17 de septiembre de 2020.-** Por recibido los autos.- Atento al estado procesal de la causa y de conformidad con lo normado por el art. 145 C.P.L.: Téngase por iniciado el trámite de cumplimiento de sentencia.- En su mérito, NOTIFÍQUESE a la demandada SOMIALCA SERVICIOS S.R.L., a fin de que en el perentorio término de DIEZ DIAS proceda a abonar la suma de \$ 1.321.364,12, en concepto de capital adeudado al actor/a, conforme Sentencia Definitiva de fecha 21/02/2020 emitida por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo.- Se hace saber que el plazo comenzará a correr a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarse las prescripciones contenidas en los arts. 146 y sgtes. de la Ley 6.204.- Practíquese planilla fiscal.- PERSONAL..." Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO -Juez- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-LMB.-

ADRIANA MONTINI

Sec. del Juzgado del Trabajo de VI Nom.

FIRMADO DIGITALMENTE

Firmado digitalmente por:  
**CN=MONTINI Adriana**  
**C=AR**  
**SERIALNUMBER=CUIL 27282229795**

Expediente: 620/12  
Carátula: **TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/**  
Descripción: **CEDULA DIGITAL A APODERADO**  
Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO VI**

---

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 620/12



H103062439856

### CEDULA DE NOTIFICACION

Expte. N° 620/12

Cedula N° 6370

San Miguel de Tucumán, 7 de octubre de 2020-

JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SEXTA NOMINACION

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA**

Se notifica a: **COPA RUBEN PABLO - APODERADO**

Domicilio: **ESTRADO JUDICIAL - 90000000000**

### PROVEIDO:

**"San Miguel de Tucumán, 23 de septiembre de 2020.-** Téngase presente la rectificación efectuada para su oportunidad.- Notifíquese conforme fuera ordenado mediante proveído de fecha 17/09/2020.- " Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO -Juez- **"San Miguel de Tucumán, 21 de septiembre de 2020.-** A lo solicitado, téngase presente para su oportunidad.- Notifíquese conforme fuera ordenado mediante proveído de fecha 17/09/2020.- " Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO - Juez- **"San Miguel de Tucumán, 17 de septiembre de 2020.-** Por recibido los autos.- Atento al estado procesal de la causa y de conformidad con lo normado por el art. 145 C.P.L.: Téngase por iniciado el trámite de cumplimiento de sentencia.- En su mérito, NOTIFÍQUESE a la demandada SOMIALCA SERVICIOS S.R.L., a fin de que en el perentorio término de DIEZ DIAS proceda a abonar la suma de \$ 1.321.364,12, en concepto de capital adeudado al actor/a, conforme Sentencia Definitiva de fecha 21/02/2020 emitida por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo.- Se hace saber que el plazo comenzará a correr a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarse las prescripciones contenidas en los arts. 146 y sgtes. de la Ley 6.204.- Practíquese planilla fiscal.- PERSONAL..." Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO -Juez- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-LMB.-

ADRIANA MONTINI

Sec. del Juzgado del Trabajo de VI Nom.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:  
**CN=MONTINI Adriana**  
**C=AR**  
**SERIALNUMBER=CUIL 27282229795**

Expediente: 620/12

Carátula: TAPIA ARIEL ESTEBAN C/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/

Descripción: CEDULA DIGITAL A APODERADO

Unidad Judicial: JUZGADO DEL TRABAJO VI

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 620/12



H103062439890

### CEDULA DE NOTIFICACION

Expte. N° 620/12

Cedula N° 6371

San Miguel de Tucumán, 7 de octubre de 2020

JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SEXTA NOMINACION

**AUTOS: TAPIA ARIEL ESTEBAN c/ SOMIALCA SERVICIOS S.R.L. Y GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO s/ X - INSTANCIA UNICA**

Expte N°: 620/12

Se notifica al Dr.: **RILLO CABANNE,RAFAEL -**

Domicilio Constituido: 23148866279

### PROVEIDO:

**"San Miguel de Tucumán, 23 de septiembre de 2020.-** Téngase presente la rectificación efectuada para su oportunidad.- Notifíquese conforme fuera ordenado mediante proveído de fecha 17/09/2020.- " Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO -Juez- **"San Miguel de Tucumán, 21 de septiembre de 2020.-** A lo solicitado, téngase presente para su oportunidad.- Notifíquese conforme fuera ordenado mediante proveído de fecha 17/09/2020.- " Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO - Juez- **"San Miguel de Tucumán, 17 de septiembre de 2020.-** Por recibido los autos.- Atento al estado procesal de la causa y de conformidad con lo normado por el art. 145 C.P.L.: Téngase por iniciado el trámite de cumplimiento de sentencia.- En su mérito, NOTIFÍQUESE a la demandada SOMIALCA SERVICIOS S.R.L., a fin de que en el perentorio término de DIEZ DIAS proceda a abonar la suma de \$ 1.321.364,12, en concepto de capital adeudado al actor/a, conforme Sentencia Definitiva de fecha 21/02/2020 emitida por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo.- Se hace saber que el plazo comenzará a correr a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarse las prescripciones contenidas en los arts. 146 y sgtes. de la Ley 6.204.- Practíquese planilla fiscal.- PERSONAL..." Fdo: DR. LEONARDO ANDRES TOSCANO -Juez- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-LMB.-

ADRIANA MONTINI

Sec. del Juzgado del Trabajo de VI Nom.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:  
CN=MONTINI Adriana  
C=AR  
SERIALNUMBER=CUIL 27282229795